

Capítulo I

FIN DE SIGLO: LA HISTORIA DE UN EMPATE

HACE MUY POCOS AÑOS, numerosos analistas coincidían en señalar que en Sudamérica habríamos experimentado un desplazamiento hacia la “izquierda”, tras una década de dominio de los ánimos conservadores. Tal aseveración solía ser sustentada en la constatación del fenómeno Chávez en Venezuela, de la importante presencia del Movimiento al Socialismo liderado por Evo Morales en Bolivia, y del apabullante triunfo electoral de Lula en el Brasil. También los resultados electorales de finales del año 2002 en el Ecuador fueron considerados en su momento como parte de esta “nueva ola” continental.

Digamos que, más allá del giro político y económico que ha dado el gobierno de Lucio Gutiérrez, en cierto sentido la aseveración señalada era verdadera, pues en el Ecuador de fin de siglo se configuró una tendencia más o menos consistente –y sobre todo persistente– de crítica e irritación con un orden de cosas. Corriente que se concretó en el cuestionamiento al modelo de sociedad que se ha pretendido vigorosamente instaurar durante el último decenio del siglo XX. En los últimos años esto se ha expresado en dos impugnaciones presidenciales, reiteradas protestas y, finalmente, en las urnas.

La crítica de las urnas, aun cuando expresada en una votación inconsistente, volátil y otorgada a favor de candidatos “salvadores” (Lucio Gutiérrez, ex militar, cholo y provinciano, y Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, ambos “advenedizos” en la política nacional) y, particularmente, en las identificaciones electorales con Gutiérrez, habría sido un

aval inequívoco a lo actuado el 21 de enero de 2000, cuando la insurgencia indígena, los llamados “movimientos sociales” y los mandos medios de las Fuerzas Armadas, en conjunción de voluntades, derrocaron al demócrata cristiano Jamil Mahuad, y por unas horas ocuparon el Palacio de Gobierno hasta que el retiro de Gutiérrez desmovilizó al fugaz gobierno. Sobre este tema volveremos más adelante, para captar la importancia de este evento, recordemos que Mahuad se ha convertido en uno de los símbolos de la plutocracia y que bajo su mandato se realizó el feriado bancario en marzo de 1999 (incautación de los depósitos). Tiendo, pues, a concordar con el analista Marco Aráuz, quien considera que “la sensación de que el 20 de octubre de 2002 el Ecuador volvió al 21 de enero de 2000 es cierta de varias maneras, pero no lo es en la medida en que se trata de una situación avalada en las urnas”¹ (*El Comercio*, 26 de octubre de 2002).

En el presente capítulo reflexionaremos sobre las características y significación histórico-política de la movilización de protesta de los últimos años del siglo XX y los albores del XXI, constitutivo esencial del torrente cuestionador, para lo cual haremos un recuento de los eventos cruciales de la protesta, dando un vistazo al tenor de las reivindicaciones, como al panorama socio-político general. Propongo también plantear unas consi-

1 El analista César Montúfar considera que el triunfo de Lucio Gutiérrez “no puede interpretarse como parte de la tendencia o giro continental hacia la izquierda” (*El Comercio*, 2002). Para Montúfar, el gran elector del domingo 20 de octubre fueron los indecisos, quienes habrían dado un súbito vuelco en su decisión electoral, dando el triunfo a los candidatos Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa, desplazando a quienes parecían más opcionados. Para el caso de Gutiérrez no se puede, dice Montúfar, considerar que se trata de un apoyo consistente, sino de una adhesión volátil, “de una sumatoria de segundos, terceros y cuartos puestos hasta remendar su posición estelar”. Es decir, el 20% de Gutiérrez no representaría un triunfo contundente a nivel nacional, sino el “remiendo” de votaciones provinciales. No obstante, si consideramos lo que la “inconsistente” votación de Gutiérrez representa con relación a las votaciones obtenidas por el candidato que ocupó el tercer lugar, el socialdemócrata Rodrigo Borja, y quien obtuvo el cuarto, el socialista León Roldós, veremos un predominio electoral de la tendencia crítica, o quizá un elocuente equilibrio con aquellas fuerzas que propugnan el ajuste. Debemos observar que el social demócrata Rodrigo Borja, con el 15% de los votos, ha representado durante los últimos años una corriente que se ha pronunciado permanentemente contra el desmantelamiento del sector estatal de la economía, aun cuando en su gobierno se dieron las modificaciones de las reglas de juego en el ámbito de la legislación laboral. Por su parte Roldós, quien obtuvo el 14%, quizá con más consistencia que Borja ha tenido una voz permanente en contra de las medidas extremas impulsadas por la tecno-burocracia y la derecha política; ambos políticos, por cierto, se ha opuesto con coherencia a la dolarización. Tendríamos también en el plano electoral la cristalización de una tendencia crítica que se orienta, ora a la beligerancia, ora a las soluciones institucionales, ora a la impugnación al Estado (como aconteció en el 2000), ora a la inscripción de sus alternativas en el marco de la legitimidad. La tendencia, no obstante, exhibe fragmentación política, quizá debido a la orfandad de liderazgo, a la ausencia de una figura simbólicamente concentradora (como es el caso de Chávez; o más aun de Lula, que tiene tras de sí un importante acumulado histórico desde las luchas antidictatoriales), pero sobre todo, en razón de la dificultad para establecer consensos en aras de una candidatura única.

deraciones sobre los límites que ha exhibido la protesta, frente al telón de fondo de los valores y metas que los sujetos movilizados decían defender. Articularé la argumentación de este capítulo en torno a tres tesis.

En la primera sostengo que la protesta social tuvo una incidencia fundamental como componente de la crisis política, en la medida en que los pronunciamientos populares y de oposición al ajuste han logrado retrasar la agenda de transformaciones neoliberales, aunque sin levantar propuestas consistentes en el plano redistributivo y social.

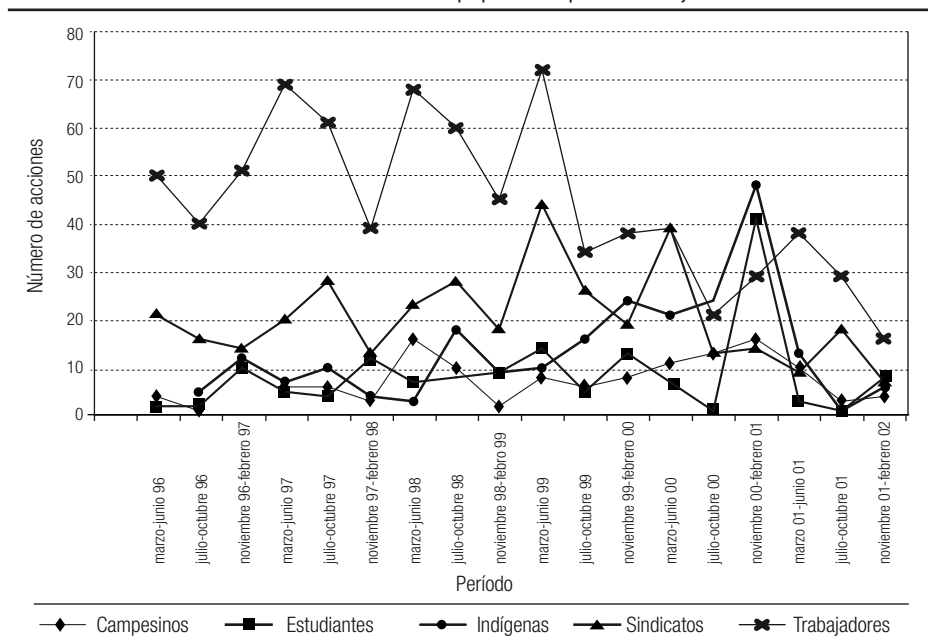
La segunda tesis –y sobre ella me permito extenderme– ubica la importancia de la movilización del sujeto laboral (obrerros sindicalizados y trabajadores) y los estudiantes, junto con la presencia de los indígenas y campesinos, para la configuración de un campo político en el que las fuerzas opositoras al ajuste han logrado mantener una dinámica de resistencia, que parecería intensificarse con la impugnación de Jamil Mahuad en el 2000. Empero, la aparente intensidad (y radicalidad) de la protesta se acompañaría del debilitamiento de los componentes antisistémicos. Así, la acción de sindicatos y trabajadores se realizó en el campo de los intereses del otro, esto es, estuvo circunscripta al plano táctico: de defensa en contra de las apetencias privatizadoras y de las reivindicaciones sectoriales, sin una propuesta clara del modelo de sociedad deseado. En la movilización indígena de la Sierra, por otra parte, ha perdido vigor la lucha por la tierra, en el contexto de la “contrarreforma” y la reestructuración de las relaciones agrarias emprendidas desde 1994. Aclaremos que al constatar el debilitamiento de los componentes antisistémicos no estamos desconociendo la contribución de esta lucha a la desaceleración del ajuste.

De paso, cabe puntualizar que sostener la importancia de la movilización del sujeto laboral y estudiantil sería un lugar común y, para muchos/as, con cierto “olor rancio”, siempre y cuando no estableciera contrapuntos con un conjunto de planteos exagerados sobre la exclusividad del movimiento indígena, “nuevo actor social” en la década del noventa, junto con la supuesta desaparición de fuerzas organizadas como los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, “movimientos sociales tradicionales”². No se trata, desde luego, de desestimar la presencia in-

2 Tales perspectivas analíticas y aun prácticas de contestación –y discursos legitimatorios– que tuvieron lugar durante los años noventa, se inspiraron en la sociología de Alain Touraine, en particular en su obra clásica *Production de la société* (Touraine, 1973). Según esta perspectiva, la unidad del espacio político y social en cada una de las sucesivas fases históricas resultaría de la oposición central entre dos actores que luchan con la finalidad de obtener el control social de los modelos culturales y los sistemas de conocimiento. En esta perspectiva serían centrales las nociones de dualidad y de identidad, entendiendo que en cada momento histórico uno de los dos protagonistas del conflicto central se vuelve el único capaz de asumir el nuevo rumbo de la acción histórica. Por ejemplo, con el advenimiento de la sociedad postindustrial y el declive de su conflicto central el movimiento obrero quedaría

dígena, ni su carácter hegemónico en la crítica social de los años noventa, que es tal en virtud de la contundencia y sobre todo de la masividad de la movilización, sino de llamar la atención sobre la importancia de la movilización del sujeto laboral, lo que sería una advertencia sobre la centralidad del antagonismo laboral en el contexto de la reestructuración de la producción, a pesar de las mentadas limitaciones de la movilización obrero-sindical. El siguiente gráfico ilustra la importancia de la movilización del sujeto laboral (trabajadores y sindicatos), durante todo el período de intensificación del ajuste, aunque declinando desde octubre de 2000, seguida de la movilización indígena y, en tercer lugar, de la movilización estudiantil (ver también Tabla I en Anexo).

Gráfico 1
Movilización de sectores populares opuestos al ajuste



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

fuera del escenario de dirimencia del conflicto, dada la posibilidad de su institucionalización y de su integración en el aparato del Estado. Mouriaux y Beraud han considerado, a mi juicio de manera acertada, que tal lectura introduce en la interpretación de la contemporaneidad un sesgo normativo, en el sentido que “importa más el hecho de descalificar ciertas formas de contestación social como formas arcaicas [...], o de subrayar la novedad de otras [...] que de pensar la unidad concreta que existe en el movimiento social” (Mouriaux y Beraud, 2000). En efecto, en el Ecuador se utilizó con frecuencia el enunciado sobre “los nuevos actores sociales” para representar el panorama social de entonces, tras lo que se consideraba el ocaso (y la obsolescencia) de la movilización obrera, estudiantil y campesina.

Si confrontamos los niveles de movilización del sujeto laboral con las reivindicaciones planteadas (ver cuadros sobre objeto del conflicto en Anexo), observaremos que tales acciones estarían predominantemente asociadas a la protesta contra las políticas de gobierno, antes que a demandas salariales y laborales, lo que podría sugerir la disolución de los objetivos de dicho sujeto en las demandas de ciudadanía social y política más generales, aunque sin una perspectiva estratégica o propuesta propia del modelo, y un contrato social acorde a las mudanzas históricas de las últimas décadas, sobre todo en el campo del trabajo y la reestructuración de la producción. En todo caso, el estudio exclusivo de la acción de dicho sujeto, así como del nuevo carácter del antagonismo laboral en nuestro país, supera los propósitos y las posibilidades del presente esfuerzo. No cabe, pues, sino esperar que tal preocupación sea reintegrada al repertorio de cuestiones que merecen ser urgentemente tratadas por las ciencias sociales ecuatorianas, más allá de las “modas” impuestas por el “orden del discurso”.

La tercera hipótesis argumenta que, junto con la presencia movilizada de estas fuerzas, y al mismo tiempo la decoloración de los componentes clasistas, se operó una suerte de “secuestro de sentido” de la protesta por parte del Estado y los medios de comunicación. “Secuestro” que se traduciría en la interlocución con el movimiento indígena-campesino en tanto “indígena” o sujeto exclusivamente étnico, mientras se operaba la supresión discursiva de otros sujetos sociales y, aun, la criminalización de su protesta.

En tales circunstancias, el equilibrio entre las fuerzas pro y anti ajuste estructural que se ha mantenido durante la década de los años noventa ha permitido una desaceleración del ritmo de las anheladas transformaciones “modernizadoras”; no obstante, hoy por hoy la balanza se ha inclinado definitivamente a favor de los reformadores neoliberales.

Al caracterizar los últimos veinte años de la historia ecuatoriana, Guerrero y Ospina anotan la presencia de dos movimientos: el primero sería aquel que propugna las reformas estructurales neoliberales en lo político y lo económico; el segundo, que se fortalece a partir de los años noventa, se originaría en las organizaciones que interpelan al Estado ecuatoriano con la reivindicación de la plurinacionalidad (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo 5). En esta línea de raciocinio considero que, siendo un eje fundamental la concomitancia del proyecto de gobernabilidad neoliberal y del proyecto de la plurinacionalidad para explicar la profundidad de la crisis política de la segunda mitad de los años noventa, es menester ampliar el panorama y tomar en cuenta el conjunto de fuerzas movilizadas, el haz político de proyectualidades e intereses en pugna. Es importante, por ejemplo, tomar en cuenta la convocatoria social que logran otras fuerzas que no han sido vistas como representa-

tivas en el proceso de la movilización de los años noventa, tales como, el Frente Unitario de Trabajadores y la Coordinadora de Movimientos Sociales en el proceso de destitución a Abdalá Bucaram, o los estudiantes, quienes inician las protestas que concluyeron en la impugnación de Jamil Mahuad. No siendo posible hacer un análisis exhaustivo de todas las fuerzas concurrentes en la producción de la crisis política, hemos optado por visualizar la presencia de las fuerzas que más consistentemente han cuestionado y resistido a la implementación de la reforma neoliberal, y a ello se debe la elección de la protesta indígena-campesina, sindical y estudiantil en el marco de este estudio.

Emprendamos ahora, con más detenimiento, el análisis de las características y los contextos de la protesta. En la primera parte de este capítulo, abordaremos las claves conceptuales para la comprensión de la efervescencia social y la corriente cuestionadora en el Ecuador contemporáneo, visualizando a la crisis en su productividad desde el punto de vista de los sujetos sociales. A continuación, caracterizaremos, el “contexto desencadenante” del conflicto. Luego ofreceremos un análisis del repertorio de opciones político-prácticas frente a las carencias de ciudadanía, desde el punto de vista de la constitución de los sujetos sociales. Intento también dar una visión general de la dinámica y contenidos de la conflictividad social y la protesta, deteniéndome en el examen de los momentos cumbre de la movilización. Y, por último, esbozaremos unas líneas conclusivas en torno a los desenlaces del ciclo de protesta.

CRISIS Y CONFLICTO

Desde hace algunos años, en el Ecuador es un hecho común hablar de crisis. Se la menciona para referirse a los diversos ámbitos y niveles de existencia de la sociedad y desde diversos ángulos teóricos. En lo que todos y todas estamos de acuerdo es en que se trata de un fenómeno multidimensional, que afecta profundamente nuestros modos de vida. Así, Julio Echeverría considera que la “crisis”:

[...] es económica, en la medida en que sus principales indicadores revelan una fuerte inestabilidad en la cual se combinan altos índices de inflación y de recesión productiva; es política, en cuanto se presentan seriamente debilitados los mecanismos y sistemas de representación, de producción de legitimidad y de gobernabilidad; es crisis social, la cual se vuelve patente en el indetenible incremento de la pobreza y del desempleo, y es también crisis ética, con fuertes rasgos de debilitamiento en el sentido de lo público y de explosión de la corrupción y de la violencia (Echeverría, 1999: 33).

Para los propósitos de este trabajo, planteamos comprender la crisis desde las “entrañas” de la sociedad, allí donde parecen diluirse las previsiones, y gobernar la indeterminación de la acción humana, singular y colectiva. Queremos, entonces, explorar la producción de legitimidad a través de la protesta y desde el punto de vista de la incidencia de los sujetos sociales, desde la manera cómo su concurrencia ha contribuido a la configuración del campo de fuerzas, en tanto espacio de dirimencia de conflictos y búsquedas de hegemonía. Es decir, buscamos entenderla en tanto formación histórica compleja, a la luz del papel de los sujetos que habitan su temporalidad, y no simplemente como “daño” momentáneo o de larga duración de un sistema, susceptible de resolución, en la medida que se coloque, “como garante de la recomposición, a algún ordenador exterior: Mercado, Nación, Partido” (Portantiero, 1988: 175).

Al considerar el desempeño de los sujetos en el contexto de la crisis política, hemos considerado fecunda la contribución de Juan Carlos Portantiero, quien propone una comprensión de la crisis situándose en el seno mismo de su productividad, desnudando la falsedad de un mundo “natural”, y mirando la artificialidad del mundo social, que es una construcción, una confluencia de proyectos y subjetividades, de opciones “cuyo resultado está abierto”, pero que tarde o temprano producirán “un orden”, buscando superar la amenaza de la entropía (Portantiero, 1988: 174-175). Al invocar el carácter artificial de la crisis no estamos confiriendo a la movilización y a la protesta el carácter de “milagro”; queremos únicamente señalar la mediación de la ideología. En tal sentido, al hablar de crisis, preferimos pensarla como el encuentro y pugna de proyectualidades y búsquedas de cambio, la concurrencia de deseos que aún no han alcanzado la dignidad de “proyectos”, o sencillamente de inconformidades inorgánicamente expresadas que se manifiestan en el campo de dirimencia de los conflictos de una época³. Entiendo al conflicto como el cuestionamiento al orden y las acciones inspiradas en tal cuestionamiento que, como sugieren Seoane y Taddei (2000), alteran dicho orden, quebrando e interrumpiendo temporalmente la reproducción de las relaciones sociales dominantes; digamos, una “interacción antagónica” con el orden (Vakaloulis, 1999), aun cuando no se lo haga, necesariamente, desde una conciencia del antagonismo.

Colocamos, pues, en el foco del análisis a los sujetos singulares y colectivos, así como a su contradictoria profundidad. Y recordar el

3 Tal definición busca una aproximación a la comprensión de la crisis “desde adentro”, a diferencia, por ejemplo, de la visión totalizante que ofrece Pasquino, para quien crisis es “un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema”, “un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo, un giro imprevisto, a veces hasta violento y no previsto en el módulo normal según el cual se desenvuelven las interacciones dentro del sistema examinado” (Pasquino, 1998: 303).

papel de los sujetos es primordial, pues la imposición de un modelo de sociedad y sus consecuencias, por un lado, y los movimientos contestatarios, por otro, no guardan entre sí una relación de causa y efecto. Por ejemplo, no hay una respuesta “automática” al deterioro de las condiciones de vida, a la opresión, a la marginación, pues bien podría ocurrir que la explotación y la pobreza, lejos de promover una oposición activa, se sostengan gracias a mecanismos de autorrepresión que sofoquen el sentido de injusticia, o que inhiban la autoestima a partir de ciertas definiciones culturales, como en el ejemplo que ofrece Moore, al mostrar que la dominación de los intocables de la India se sustenta en la desviación de la indignación hacia el “orgullo” por realizar trabajos humildes (Moore, 1987). Entonces “la crisis política”, desde el punto de vista que la estamos abordando, existiría, en gran medida, porque los “datos” del “mundo de la vida” están siendo “procesados” o leídos desde proyectualidades subjetivas, mediaciones culturales, valores y narrativas sociales, y porque tales energías están siendo canalizadas hacia la constitución de las fuerzas actuantes en el campo político.

Recogiendo las definiciones conceptuales planteadas hasta aquí, podríamos decir que la crisis ecuatoriana puede ser vista como el resultado de la convergencia de proyectos de cambio –aun vagamente concebidos– e inconformidades que surgen bajo ciertas pautas político-culturales, y al calor de la contemporánea centralidad de la noción de “dignidad”. Búsquedas que han desembocado en la demanda de ciudadanía social y política. El caldo de cultivo de tales valores políticos, modernos –y liberales– por excelencia, históricamente han sido la influencia de la ideología libertaria de las izquierdas del siglo XX, la teología de la liberación que germinara en América Latina, pero también, la interacción de los sujetos con el Estado desarrollista, a merced de la democratización de la educación. Y es el acceso a la educación lo que ha permitido a amplios sectores de la población acrecentar sus expectativas igualitaristas, a partir de la acumulación de lo que Bourdieu (2000) denomina “capital social y cultural”.

Por otro lado, los planos subyacentes de la movilización y la protesta serían varios. En primer lugar, el surgimiento “normal” de demandas producido por el acumulado histórico de falta de respuesta a las aspiraciones sociales (de índole laboral, cívico-regional, de género). En segundo lugar, las reivindicaciones que son producto de “la crisis” en tanto resultado de las políticas de ajuste (salud, vivienda, educación, acceso al consumo), tamizadas, desde luego, por expectativas modernas; reivindicaciones que son puestas en juego en el campo de conflicto de intereses por la realización de un modelo de sociedad.

Pablo Ospina considera que el conflicto que dinamiza la movilización indígena y campesina de fines del siglo XX sería “el resultado

de una acumulación de historias fallidas y de varios siglos de distancia entre el país real y el país previsto por las instituciones modernas” (Ospina, 2000: 130). Recuperamos la idea de “distancia” por ser precisamente ella la que nos ayuda a visualizar el crisol en el que se forja el conflicto mayor del Ecuador contemporáneo: la abismal discrepancia entre el orden existente y los estándares de vida vigentes, por un lado, y, por otro, las apetencias por lo moderno, llámese inclusión, bienestar o igualdad. “Lo moderno”, en tanto meta de la protesta como fuente de inspiración de la misma, sería aquí un concepto de amplio espectro, dado que remite al ideal socialista que no ha sido removido, al ideal liberal –y no estrecha y unívocamente neoliberal–, y también al ideal desarrollista concebido aún como desarrollo industrial y progreso. Ideales y horizontes de expectativas que estarían enraizados en los relatos cotidianos, perseverando en los ánimos y mentalidades singulares y colectivos, aunque de manera espontánea, y frecuentemente inconsciente, inconexa y aun dislocada.

En suma, proponemos pensar “la crisis” ecuatoriana contemporánea desde una perspectiva moderadamente “constructivista”, que considere el papel de los sujetos en la prefiguración de los cambios, pero sin dejar de lado los aspectos “objetivos”, las externalidades a las que esta se asocia.

EXTERNALIDADES DE LA CRISIS

El primero de tales aspectos externos es el origen de su persistencia, pues la crisis ecuatoriana contemporánea ha dejado de ser “un momento” para convertirse en una “latencia” que de tiempo en tiempo adquiere dimensiones dramáticas. Como ha manifestado Jorge León Trujillo, la crisis contemporánea en nuestro país “dura ya más de una generación”, de manera que no se trataría apenas de un desperfecto en el funcionamiento del sistema, parece que ese “daño de la máquina”, antes que ser inesperado y pasajero, se ha constituido, más bien, en parte del funcionamiento del sistema, sin que se pueda ya concebirlo solo como parte de una crisis” (León Trujillo, 2000: 15).

Una de las fuentes de tal persistencia, según el mismo autor, serían las imposiciones externas de cambio de modelo de sociedad:

Una de las características de las sociedades dependientes es que deben asumir olas, cada vez más frecuentes, de grandes mutaciones que ellas no han engendrado, y que requieren de tiempo para ser internalizadas. Las sociedades dependientes superponen, por consiguiente, los tiempos de cada ola de cambio, sin que las nuevas olas borren a las anteriores. Se superponen pasados y presentes, sin que necesariamente se vuelvan

armónicos; la norma de estas sociedades es, más bien, que estos tiempos diferentes, juntos, formen su singular dinámica, su personalidad (León Trujillo, 2000: 16).

En esta suerte de “palimpsesto” histórico de la dependencia se inscribiría actualmente una nueva ola de cambios dictados por la expansión del modelo neoliberal, el mismo que se pretende instaurar sobreimponiéndolo a los atavismos de la dominación colonial.

Un segundo aspecto externo es la búsqueda de aplicación del modelo neoliberal sobre esta acumulación de saldos “atávicos”, diseño que tiene en la disminución del gasto social a una de sus definiciones centrales. Sumadas a esta explosiva mezcla las consecuencias de la recesión, tenemos una declinación categórica de las capacidades redistributivas del Estado que se expresa dramáticamente en la vida de la población. Así, solo por citar una pocas cifras, a partir de 1990 se estanca la ampliación de la escolarización primaria; si entre 1982 y 1990 el porcentaje de niños/as de 6 a 11 años escolarizados subió de 69% a 89%, durante la década de los años noventa, en cambio, la tasa de matrícula se detuvo en alrededor del 90%. De otro lado, el número de personas que viven bajo la línea de pobreza aumentó del 34% en 1995, al 46% en 1998 y al 56% en 1999 (Barrera, 2001: 259). Según Vázquez y Saltos, desde 1995 al 2000 se habría duplicado el número de pobres y triplicado el de indigentes, pasando el primer indicador de 3 millones 200 mil personas a 8 millones 100 mil, cifras nunca antes vistas (Vázquez y Saltos, 2003: 264).

Son estas las presiones que provocan un “conflicto distributivo” que, según Barrera, se sitúa en medio de dos coordenadas:

por un lado, en el nivel socio-económico, la aplicación de una modalidad de modernización económica, excluyente y concentradora; y de otro, en el nivel socio-político, la persistencia de la democracia como orden formal y de un naciente sentido democrático en la sociedad como efecto de la propia modernización de las instituciones sociales (Barrera, 2001: 258).

El ajuste se convierte, entonces, en el “contexto desencadenante” (noción de León Trujillo, 1994), el entorno de la manifestación del conflicto, que se expresa a través de la protesta y la movilización.

Siendo las carencias distributivas una de las fuentes del conflicto detonante de la protesta, este se produciría, como hemos dicho, a partir del cuestionamiento a la distancia entre la formalidad de las declaraciones sobre la inclusión y los derechos sociales y la ausencia real de ellos. Distancia que se expresa en un desencuentro categórico entre las identificaciones colectivas como “comunidad imaginada” y el sentimiento

de estar en los márgenes de la misma. Andrade ha señalado que la trayectoria de la sociedad ecuatoriana, posterior a la reforma política de 1978, ha seguido orientaciones contradictorias, pues mientras, por una parte, se han afirmado las libertades políticas, por otro lado, se ha erosionado tanto el sentimiento de pertenencia a una comunidad política como la igualdad (Andrade, 2002: 2). Los argumentos de los capítulos que siguen descubren más bien la existencia de un sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada” forjado a través de la educación y el discurso sobre la nación, así como en la relación con el mínimo Estado de Bienestar y de Desarrollo construido en el Ecuador durante las décadas precedentes. Durante los años setenta, las políticas de estado dieron cierta cobertura social y oportunidades ocupacionales a amplios sectores de la población, aunque sin consolidar los fundamentos para el ejercicio de la ciudadanía social; en todo caso, la movilidad social ascendente gestada por el desarrollismo estimuló la participación en la comunidad política a través de la igualdad. Es este sentimiento ciudadano destituido de sólidas garantías para la ciudadanía lo que estaría en el origen de la inconformidad, la protesta y la movilización de los últimos años del siglo XX.

LA INTENSIFICACIÓN DEL AJUSTE

Desde 1997, con las radicales medidas que se aprestaba a tomar el gobierno de Abdalá Bucaram, se vive un ciclo de “intensificación del ajuste”, tras un preludio del mismo que se experimentó ya con el gobierno de Sixto Durán Ballén entre 1992 y 1996, cuyo período ha sido considerado como de afirmación del modelo neoliberal (Barrera Guarderas, 2001)⁴. Durante la administración de Durán-Dahik, la transición habría intentado llevarse a término en tres direcciones fundamentales.

En la primera, al inicio de su gobierno, Durán Ballén adoptó un paquete de medidas que fueron calificadas como “adscriptas en una orientación explícita y firme del gobierno de entrar de una vez por todas en la senda de la modernización neoliberal” (Barrera Guarderas, 2001: 136). El paquete consistió en la devaluación del 35% del tipo de cambio real del mercado de intervención, el establecimiento de mecanismos de mercado abierto como mesas de dinero y subastas semanales de bonos para el manejo de la política monetaria, la elevación de las tarifas de energía

⁴ Al inicio, la implementación del modelo neoliberal se puede rastrear a los gobiernos de Hurtado y León Febres Cordero, a través de sus políticas monetarias y de restricción del gasto público. En lo posterior, el modelo fue impulsado durante el gobierno de la Izquierda Democrática (1988-1992), bajo el lema de la política de “concertación” y en gozo de una mayoría parlamentaria consiguió un cambio radical de la legislación laboral a través de la Ley de maquila y la creación de las empresas de tercerización, así como de reformas al Código Laboral.

eléctrica y la elevación del precio de la gasolina, entre otros. Igualmente significativa en el ámbito de la consolidación de dicho modelo fue la creación del Consejo Nacional de Modernización (CONAM), cuya función sería la de impulsar la privatización de las empresas estatales.

La segunda consiste en el nuevo diseño de las instituciones políticas. En ese sentido se impulsa una reforma política que inaugura una nueva forma de relacionamiento de la sociedad con el Estado a través de la candidatización de los independientes. Según Arias (1995: 53), dicha forma de relacionamiento contiene, en el fondo, una censura al sistema de partidos políticos, la que concordaría con la exigencia desde las políticas de ajuste, para que la lógica de toma de decisiones se concentre en las manos de tecnócratas, marginando posibles influencias “políticas” (léase: de los remanentes de la antigua izquierda y también la “nueva” izquierda, es decir algunos sectores de los llamados “movimientos sociales”). Aunque prevista en el marco de la liberalización de la sociedad, tal medida tuvo el reverso paradójico de la consagración de las antiguas formas patrimonialistas de la política –las mismas que habían sido neutralizadas hasta cierto punto con la reforma política de finales de los años setenta– pues con la promoción de los independientes, cuyas candidaturas no demoraron en proliferar, se abrían nuevamente las puertas a la “dominación política personalizada” y al menoscabo de las mediaciones institucionales (posteriormente algunas de las consignas electorales captaron y tradujeron expresivamente este fenómeno: “un candidato en quien confiar”, “vota por alguien de tu barrio” y así por el estilo) (De la Torre, 1997).

La tercera orientación crucial de reestructuración de los marcos societales fue la tramitación de la nueva Ley de Desarrollo Agrario impulsada por la Cámara de Agricultura y que “suponía un punto final al proceso de reforma agraria ejecutado a medias desde los setenta” y que buscaba “garantizar la propiedad sobre la tierra y establecer garantías para la inversión privada” (Barrera Guarderas, 2001: 167). En realidad, los cambios que se buscaba apuntalar desde el Estado eran de carácter radical y tenían que ver en primera instancia con la reprimarización de la economía, con el rol decisivo del sector agropecuario de cara a la diversificación de los productos de exportación; en segunda instancia, las reformas institucionales del propio sector agropecuario, entre las que se contemplaba la privatización de entidades antes dependientes del sector público y, por último, con la finalización del proceso de reforma agraria, y la liberalización del mercado de tierras y de capitales en el agro (Guerrero y Ospina, 2003).

En otro ámbito, se intensifican desde entonces las ofensivas simbólicas de desprestigio de los frentes sindicales, instancias que representaban a fuerzas sociales debilitadas por la reformulación de las leyes

laborales durante la administración de Rodrigo Borja (sobre este punto, ver Capítulo IV).

Estas orientaciones se llevan a cabo en un contexto de agudización de la crisis política, acentuada hacia el final del gobierno de Durán Ballén y aderezada por los escándalos de corrupción que involucraron a las más altas esferas de la administración estatal y sus allegados (el autoexilio y fuga del vicepresidente Alberto Dahik, por la acusación de manejo doloso de los gastos reservados). Estos factores impiden, entre otras cosas, que se consolide en este período la reforma neoliberal, pues si bien la reforma política fue aprobada en el referéndum de 1995, el voto popular no dio luz verde a la privatización de las empresas de propiedad estatal y del Seguro Social. Los esfuerzos por consolidar las bases del modelo neoliberal tuvieron un éxito parcial, pues quedaban “resquicios” del anterior modelo: empresas estatales “estratégicas” por privatizar y una Constitución que debía ser reformulada, a fin de que diese cuenta de los requerimientos jurídicos para dichas privatizaciones (en 1997, serán los propios “movimientos sociales” los que impulsen la elaboración de una nueva Constitución, la misma que reformularía las bases jurídicas para el tratamiento de los bienes públicos, a tono con las exigencias supranacionales de eliminación de barreras para las privatizaciones). Hacia 1996, entonces, se mantenía en pie la agenda de las privatizaciones y la eliminación de los subsidios estatales. Y es esta pugna en torno a la postergación de la conclusión de la instauración de las bases del modelo lo que ha signado de manera dramática la novísima historia de nuestro país.

Entonces, si el gobierno de Sixto Durán intentaba consolidar las bases para la concreción del modelo, Bucaram y luego Mahuad pretenderían, por una parte, impulsar las privatizaciones pendientes y la eliminación de los subsidios estatales, y luego fortalecer dicho modelo mediante un régimen monetario radicalmente distinto, llámese convertibilidad o dolarización, que asegurase la inserción en la economía globalizada y, específicamente, en la “zona de influencia” del dólar estadounidense (conceptualización que adquiere hoy en día una renovada validez, de cara a las presiones por la constitución del ALCA. Y se lo pretendió hacer, desde 1996, en forma de shock y bajo modalidades autoritarias.

La postergación de las reformas neoliberales liberal habría operado en dos direcciones: en primer lugar, habría profundizado la tendencia a la crisis política, sobre todo en materia de legitimidad y capacidad de procesamiento del conflicto del sistema político, y, en segundo lugar, se habría activado “el tránsito de las demandas formuladas en clave étnica y campesina del movimiento indígena a un conjunto de planteamientos que articulaban la lucha contra el neoliberalismo y las reivindicaciones étnico nacionales y económico-sociales” (Barrera Guarderas, 2001: 180).

En este ciclo de intensificación del ajuste, la experiencia de la crisis se torna especialmente dramática debido a los intentos y luego a la aplicación de medidas extremas como la dolarización –forzada en momentos en que no era recomendada ni siquiera por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–, con sus secuelas de bloqueo para la competitividad de la producción nacional, y elevación de los precios a niveles internacionales y el deterioro de la calidad de vida, minando profundamente la credibilidad en las instituciones democráticas⁵. En este entorno de fragmentación del sistema político y sus bases sociales, ganarían importancia, desde el punto de vista de los sujetos “llanos” de la política, los canales extra-institucionales de resolución del conflicto y de las carencias de ciudadanía; entra en juego la “invención” de formas individualistas de sobrevivencia y canalización de demandas de ciudadanía social y política (en ese sentido, el caso del Perú durante el período de Fujimori es paradigmático), y se fortalecen, finalmente, las formas de dominación patrimonialistas, cuyas manifestaciones no tardaron en hacerse presentes a través de las urnas.

ENTRE LA POLÍTICA Y LA COTIDIANEIDAD: EXPLORANDO SALIDAS

¿Cuáles son las alternativas de los sujetos, singulares y colectivos, frente a las carencias sociales? Ellas van a depender de las identidades políticas y los sujetos van a mantener una relación diferenciada con la institucionalidad política, dependiendo de su horizonte político-cultural.

Una primera tabla de salvación sería la opción electoral, que abriría amplias perspectivas a los candidatos “salvadores”⁶. Es, por

5 Un estudio presentado por Flavia Freidenberg (2000), acerca de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas en los países de la región andina, nos trae interesantes revelaciones al respecto. La autora destaca “la excepcionalidad de la opinión pública ecuatoriana en una serie de cuestiones”, pues “los ciudadanos ecuatorianos no se manifestaron en su mayoría defensores incondicionales de la democracia como forma de gobierno, ni de los partidos políticos y el Congreso como instituciones indispensables para el funcionamiento del sistema democrático” (Freidenberg, 2000: 217). En efecto, solamente el 41% de los ciudadanos ecuatorianos encuestados habrían declarado su apoyo rotundo a la democracia, en contraste con los ciudadanos encuestados de Bolivia, que lo habrían hecho en un 66%, de Colombia (69%), de Perú (60%), de Venezuela (64%). Por otro lado, el 48% de los encuestados en Ecuador considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, mientras que para el 42% no puede hacerlo; nuevamente observamos la diferencia, a veces drástica, con los otros países de la región, pues en Bolivia el 31% de los encuestados disocian la democracia de los partidos políticos, en Perú el 28%, en Colombia el 42%, y en Venezuela el 43%. Por último, el 47% de los encuestados ecuatorianos creen que una democracia puede funcionar sin Congreso, en tanto que en Bolivia así lo creen solamente el 27%, en Perú el 26%, en Colombia y Venezuela, el 38% respectivamente (Freidenberg, 2000: 206, 211, 215).

6 Los procesos de reconocimiento político de líderes personalistas o “héroes” de la política están analizados extensamente en mi libro *Género, subjetividad y populismo* (León Galarza, 2006). El examen de estos fenómenos se profundiza también en León Galarza, 2002.

cierto, una opción desde el individualismo, una comunión electoral solitaria con un héroe personalista, que emerge del mundo de las emociones privadas, y que genera evaluaciones dominadas por las metáforas del parentesco. Tal actitud frente al deterioro de los estándares de vida habría gravitado sobre todo en el triunfo de Bucaram en 1996, en la importantísima votación de Álvaro Noboa en 1998 y 2002; aunque en cierta medida también en el reconocimiento electoral a Lucio Gutiérrez, uno de los protagonistas de los hechos del 21 de enero de 2000. Por otro lado, en el proceso mismo de identificación política de los/las adherentes a las candidaturas personalistas se genera la experiencia de una subalternidad: hijo/hermano(a) menor, como contraparte a la representación de la unicidad del individuo, héroe, o líder; subalternidad que es negociada constantemente mediante proyecciones de los seguidores en la figura del líder y mediante la exigencia de cumplimiento de las promesas, aun cuando tal subalternidad generalmente, se encuentra asociada una fuerte demanda de protección. Así, “el retorno del líder” y la contundencia de las opciones identificatorias encuentran un nuevo aliento hoy, con la retirada del Estado de las responsabilidades sociales que en grado mínimo eran atendidas antaño, y con el correspondiente repliegue de la ciudadanía en sus redes familiares, ámbito en el que es posible la atenuación de las carencias de ciudadanía social. De tal manera, la primacía de lo público y colectivo como vías de resolución de la crisis darían paso a la primacía de lo individual, limitando la percepción del fenómeno político a la percepción de lo inmediato, con una perspectiva moralizante y desde las metáforas del parentesco.

En todo caso, a pesar de la invocación de elementos externos a la política, esta alternativa se puede considerar institucionalizada en la medida que se encuentra referida al sistema político, emanando de lo cotidiano pero con repercusiones político-institucionales. Es decir, la realización de tales opciones electorales podría representar también la realización de la ciudadanía, mediante el establecimiento de vínculos oblicuos o *ad hoc* con la institucionalidad del Estado, a través de las relaciones personalizadas, en este caso con los intermediarios políticos de los líderes o el patrocinio de personajes importantes, del favor material y simbólico que alivia el apremio y/o eleva el capital simbólico de sus beneficiarios, pero también de la red de relaciones que un sujeto pueda tener en la comunidad (DaMatta, 1985; De la Torre, 1997: 63)⁷.

⁷ Estos fenómenos tendrían como efecto la llamada “crisis de representatividad”. Simón Pachano la define como “la baja o nula capacidad de los partidos –y, en general, de las instituciones del sistema político– para representar los intereses y procesar las demandas de la sociedad” (Pachano, 2000: 156). El origen de tal situación sería la vigencia de prácticas como el procesamiento informal de las demandas sociales, a través del clientelismo.

Ahora bien, si es verdad que la textura político-cultural de tales opciones se asienta en la individualidad, el entorno cotidiano y la posibilidad de satisfacción inmediata de las carencias, ¿excluye esta alternativa la movilización? Puede ocurrir que “los clientes se rebelen”, para usar una expresión de Marina Farinetti. ¿Cuáles son las características de tal rebelión? ¿Cómo se configuraría el conflicto que la anima?

Antes que nada, es preciso desarmar la dualidad “clientelismo”/ acción colectiva. Como Farinetti sostiene –remitiéndose a Cristina Escobar– el clientelismo no necesariamente socava las posibilidades de acción colectiva, pues representaría dos caras de la misma moneda: la exclusión social (Farinetti, 1997)⁸. En efecto, en mi propio trabajo he encontrado interlocutores/as, cuyos testimonios permiten confirmar la confluencia de ambos fenómenos⁹. La pregunta sería, entonces: ¿se aproxima, el sentido de esta participación a una demanda de ciudadanía? En un artículo anterior he ensayado respuestas a esta interrogante, elaborando el modelo de la censura del sector volátil del electores que habría votado con una firme expectativa de salvación (León Galarza, 2002).

Sostengo que si la unción de un candidato parte de la dinámica de las identificaciones, el contrato –ficcionalmente personal– que con él se establece, se funda en la expectativa del/la elector/a por la compensación al bien simbólico-político otorgado: el voto. Se trataría de un circuito de reciprocidad que no puede ser interrumpido, más aún en virtud de que fue inaugurado por la promesa electoral, que habría dado paso a las expectativas que guiaron la opción. En el contexto de las políticas de ajuste, el cumplimiento de la promesa se torna deleznable, sobre todo cuando las ofertas son proferidas en abundancia, a tal punto que su obligatoriedad se torna prácticamente improbable. El incumplimiento de los ofrecimientos generaría la censura de un sector de adherentes (otros, los incondicionales, y, desde luego, los intermediarios políticos, prefieren desviar la culpa a terceros, “la oligarquía corrupta”, etc.), que si bien se plasmará en una nueva “delegación” a un candidato de similares características –así se explicaría, por ejemplo, la oscilación de votantes entre Bucaram y Álvaro Noboa, en los últimos años, y quizá cierto caudal de tales votos pueda beneficiar a otros

⁸ Farinetti menciona el artículo de Cristina Escobar (1997).

⁹ En mi ya citada tesis de doctorado menciono el testimonio de Silvia, una mujer cuencana de aproximadamente 45 años, quien relata la experiencia vivida en su barrio, donde los pobladores masivamente votaron por Bucaram, pero también participaron en las movilizaciones de censura algunos de ellos, cuando Bucaram, a inicios de 1997 anunció la elevación del precio del gas doméstico. Tras la impugnación de Bucaram, su destitución y la continuación con la profundización del ajuste en el gobierno de Jamil Mahuad, advino el arrepentimiento por la censura: “De gana mandamos botando al loco, con él mismo bien hubiéramos estado”.

candidatos del espectro político y, por cierto, a Lucio Gutiérrez-, eventualmente puede derivar en una adhesión a las manifestaciones públicas, engrosando las filas de los movilizados, aun cuando, posiblemente, atomizados y disueltos en ellas. Y tal “revuelta”, de orden eminentemente moral, paradójicamente, estaría inscripta en la reproducción del orden de la “delegación”, en el sentido que a este concepto confiere Guillermo O’Donnell, en sus trabajos sobre “democracia delegativa” (O’Donnell, 1997a y 1997b).

Otra forma de búsqueda de alternativas es la crítica al orden que se plasma en la movilización de protesta, asume un carácter colectivo y se basa en identidades políticas de otra textura. Un primer elemento de esta otra textura es, como diría Moore (1987), la búsqueda de reformulación del contrato social vigente. Tal reformulación, en el contexto contemporáneo, no se la debe necesariamente entender como un clamor por salidas “revolucionarias”, sino como una búsqueda de respeto a la dignidad, expresada en la lucha por la vigencia de una ciudadanía social y política, que eventualmente puede asumir caracteres “antisistémicos”, aun cuando parcialmente podrían estar permeados por la personalización del conflicto. Ahora bien, como Taylor señala, la política vinculada a la valorización de la dignidad es la política del universalismo (Taylor, 1993). El universalismo aquí se plasmaría en el rechazo a las privaciones originadas por las políticas de ajuste, y al déficit endémico de ciudadanía social. Es este segundo modelo del que nos ocupamos en este libro, aunque, desde luego, no se pueden trazar fronteras rígidas entre una y otra forma de la protesta, ni verlas como polos opuestos.

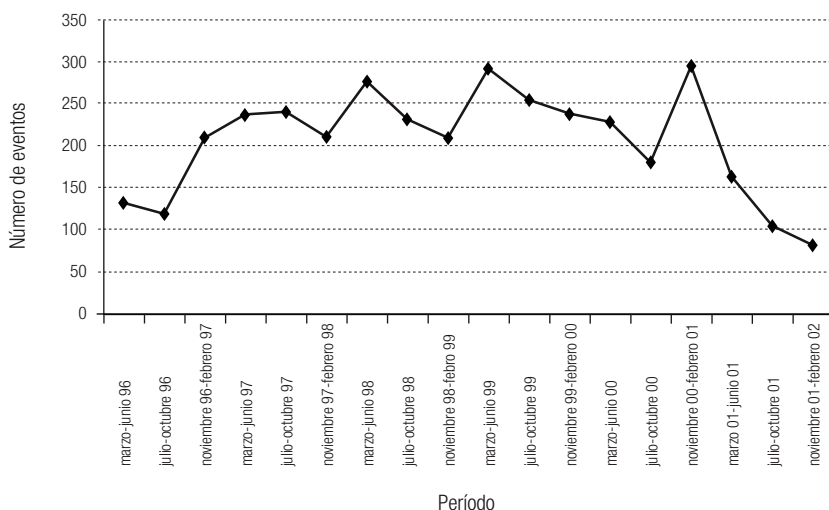
Observemos ahora cuáles son las reivindicaciones específicas que animaron el curso de la historia ecuatoriana contemporánea, en los momentos de mayor efervescencia social, desde agosto de 1996 hasta el momento de declinación de la protesta en el 2002.

LA PRODUCCIÓN DE DEMANDAS SOCIALES Y LA CONFLICTIVIDAD

El propósito de la descripción que sigue es recrear el ambiente de efervescencia socio-política que anima los últimos años del siglo XX en el Ecuador, para remitirnos en lo posterior a los contenidos de la protesta en sus momentos cumbres, contextualizarla e interpretar su significación. Cabe puntualizar que establecemos una diferencia semántico-conceptual entre “conflictividad” y “protesta”, de manera que si la primera se refiere al desencuentro de intereses sociales, políticos, partidarios, institucionales, regionales, la segunda señala específicamente a manifestaciones beligerantes de la crítica social, de la censura a las políticas de Estado y de gobierno, en la senda de las reformas neo-

liberales. Demos, pues, por ahora un vistazo panorámico al conflicto que ha caracterizado la vida política de los últimos años del siglo XX, constatando el crecimiento de la conflictividad social a partir de 1996 (ver Tabla II en Anexo).

Gráfico 2
Dinámica del conflicto



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

En el ciclo de intensificación del ajuste, desde los primeros meses del gobierno de Bucaram, se iniciaba también un período de intensificación de la conflictividad social, cuyos momentos más altos, según el número de conflictos y en orden cronológico, recaen en el cuatrimestre entre noviembre de 1996 y febrero de 1997. El Centro Andino de Acción Popular, a través de la revista *Ecuador Debate*, explica el aumento de la conflictividad por la cantidad de desaciertos del gobierno de Bucaram, así como por su “política del espectáculo”, que estuvo marcada por un claro matiz regionalista, lo que habría catapultado las oposiciones sectoriales y políticas (CAAP, 1997a: 35-36).

A continuación, durante los primeros meses de gestión presidencial de Fabián Alarcón, la conflictividad se incrementa hasta julio y, ligeramente, hasta octubre de 1997. El mismo colectivo de análisis explica tal situación por los rezagos y los efectos socio-políticos del gobierno de Bucaram (CAAP, 1997b: 29). Por mi parte, diría que tanto las demandas como las exigencias de solución fueron reforzadas por el sentimiento de legitimidad de las mismas gestado en los procesos partici-

pativos en la impugnación al bucamato. Entre julio y octubre de 1997, la beligerancia se mantiene, asimismo, debido “a la inestabilidad de los pactos que se establecen” (CAAP, 1997b: 27). Si bien la confrontación tiende a declinar coincidiendo con las festividades de fin de año, luego tiende nuevamente a incrementarse y recrudece en el período contemplado entre marzo y junio de 1998, cuando a la problemática social no resuelta (como, por ejemplo, las demandas en torno al presupuesto para la educación, la salud, los ajustes salariales) se suman las limitaciones para resolver las secuelas del fenómeno de El Niño, así como fenómenos de orden político-institucional ligados a la controversial convocatoria a la Asamblea Constituyente y a la proximidad de la campaña electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República (CAAP, 1998a).

Un momento singularmente conflictivo es el que transcurre entre marzo y junio de 1999, bajo la gestión presidencial de Jamil Mahuad, en virtud del feriado bancario y el congelamiento de depósitos decretado el 8 de marzo de 1999. Se trataba, como se ha dicho innumerables veces, de una debacle del sistema bancario nacional. Por añadidura, en este momento crítico se reforzó el carácter regional, pues como recordaremos el actor principal del atraco bancario fue el Banco del Progreso, de origen guayaquileño, mientras que se rumoraba insistentemente que el gran beneficiario de la inestabilidad monetaria y cambiaria fue el Banco del Pichincha, con raíces serranas. Veremos más adelante que es justamente este momento uno de los más sensibles al rechazo a las políticas de gobierno, y las impugnaciones se expresaron en un “enjambre” de huelgas, paralizaciones, movilizaciones de maestros, trabajadores de la salud, transportistas y hasta en disputas entre los poderes del Estado (CAAP, 1999b: 3).

Después, como la curva indica, en la segunda mitad de 1999 la conflictividad tiende a bajar; en todo caso este período estaría signado por tendencias contradictorias, pues el anuncio de la dolarización habría permitido poner en compás de espera a los sectores medios, alejando hasta cierto punto el fantasma de la hiperinflación (Guerrero y Ospina, 2003). Tal tendencia entrañaría también el declive del conflicto anclado en la polarización regional, aun cuando repunta la conflictividad laboral privada y el malestar con el incremento de precios de los combustibles y el nuevo esquema tributario (CAAP, 1999c). En todo caso, se pactó el mantenimiento de precios de los combustibles hasta julio de 2000, el subsidio eléctrico a los más pobres y el descongelamiento gradual de los ahorros; de todas maneras, la inminencia de la dolarización mantuvo en alerta a algunos sectores, como los indígenas, y es por ello que, a pesar de que la curva de la conflictividad general descendió, se produjo el levantamiento del 21 de enero del año 2000, cuando los mandos medios del ejército respaldaron las acciones indígenas (CAAP, 2000a).

Desde enero de 2000 hay una tendencia de crecimiento de la conflictividad con caídas temporales, hasta alcanzar el clímax en el cuatrimestre noviembre de 2000-febrero de 2001, con el levantamiento indígena que culminaría con la firma del acuerdo de veintinueve puntos entre los indígenas y el gobierno, para luego decrecer en forma notable (retomo el tema en la sección “La gran minga”). ¿Por qué ocurrió tal declinación? Podríamos ensayar las siguientes respuestas: primera, las fuerzas organizadas se encuentran en un compás de espera, primero, en razón de la expectativa creada por la firma del acuerdo y, segunda, por la proximidad de las elecciones y la dedicación de la fuerza movilizadora más importante, la CONAIE, al tema electoral; por otro lado, la gestión del gobierno de Gustavo Noboa procura no crear motivos para alzamientos, al punto que se frustró el levantamiento indígena que fue convocado para marzo-abril de 2002, cuando se suspendió la subasta de las comercializadoras de energía eléctrica. El gobierno tampoco dio paso a la elevación de pasajes ni a la elevación del precio del gas de uso doméstico. En todo caso, las últimas elecciones presidenciales habrían servido, como hemos sugerido al inicio del capítulo, como un canal institucionalizado para la expresión de la inconformidad con un estado de cosas (CAAP, 2000a; 2000c; 2000d; 2001c; 2002a).

Pasemos, ahora, del panorama de la conflictividad al enfoque de la protesta, propiamente dicha, hacia los contenidos concretos de las demandas y reivindicaciones sociales y políticas en los momentos de ruptura, que no necesariamente han coincidido con los momentos más altos de la conflictividad.

¡QUE SE VAYA!

En 1996, Abdalá Bucaram se presentó a las elecciones presidenciales con un tono contemporizador, prometiendo cumplir con todo aquello que le demandasen las fuerzas sociales y políticas dispuestas a apoyarlo; explicitando con estridencia proyectos de asistencia a los sectores populares (como el célebre plan de vivienda “Un solo toque”), así como su decisión de lucha antioligárquica. Se hacía todo esto sin despejar la posibilidad de dobles interpretaciones, pues al mismo tiempo se refería a medidas en pro de la profundización del ajuste estructural. El talante antioligárquico duró apenas hasta las vísperas de la toma de mando, pues ya en el proceso de conformación del gabinete ministerial explicitó el carácter estratégico de su alianza con la plutocracia: designó, por ejemplo, como ministro de Economía y Finanzas a uno de los hombres más ricos del Ecuador y América Latina, Álvaro Noboa, o al potentado Alfredo Adum, candidatos, en todo caso, a una neo-oligarquía, dentro de una lógica de “circulación de elites”.

En los meses inmediatos a la juramentación del cargo presidencial se rompió definitivamente el tono contemporizador, poniendo en marcha su plan de privatizaciones y eliminación de subsidios al gas, acompañando a dicho plan con una serie de escándalos de corrupción y de abusos de poder por parte de algunos de sus ministros. Se anunció tempranamente la puesta en marcha de un plan de convertibilidad monetaria. En tal contexto, si bien intentó ganar respaldo cogobernando con algunos de sus potenciales adversarios, a escasos dos o tres meses de gobierno comenzaron a sentirse las señales del desgaste de una gestión que habría de terminar, como sabemos, en la impugnación masiva del presidente y su destitución por el Congreso Nacional.

La primera fuerza social que se movilizó en contra del gobierno de Bucaram fueron las mujeres, y el mes de noviembre estuvo marcado por su participación¹⁰. Desde el comienzo se puso en evidencia el carácter urbano de la movilización antibucaramista, pues en las calles del centro de Quito, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno se veía a mujeres de diversa extracción social, desde mujeres con anacos¹¹ hasta damas elegantes, con sacos de cachemira y tacones¹² (*El Comercio*, 1996b).

En noviembre se dio también el inicio de las protestas de la CONAIE, fuerza que se expresó públicamente el 20 de noviembre, manifestándose, de manera central, en contra de la creación del Ministerio Étnico y sobre todo del clientelismo con el que se manejó el nombramiento para esa cartera, pero también en contra de las medidas económicas que se aprestaba a imponer el gobierno. Se rechazaba, por ejemplo, el proyecto de convertibilidad, con el que solamente se buscaría “pagar favores políticos a sectores de importadores que apoyaron en la campaña” (*sic*) (*El Comercio*, 1996a). La CONAIE se opuso también

10 Los pronunciamientos de las mujeres expresan, eventualmente, una protesta contra el gobierno como metáfora del orden patriarcal y la violencia de género. Así, el 9 de noviembre, en Quito la agrupación “Mujeres por la Democracia” realiza la primera manifestación que culmina en la Plaza de la Independencia, demandando la renuncia del Ministro de Energía y Minas Alfredo Adum, quien había golpeado a una de sus subalternas. Los ejes de la movilización de las mujeres contra Bucaram y del mandato de la organización a los legisladores Frente Patriótico fueron: “No a la violencia, no a la corrupción y por una mejor calidad de la vida de ecuatorianos y ecuatorianas” (Palán, 1997: 216).

11 “Anaco” prenda de vestir de mujeres indígenas de algunos pueblos de la sierra norte del Ecuador; cumple las funciones de una falda.

12 A título de testimonio personal, recuerdo que las mujeres aglutinadas en la CPME estuvimos presentes en la marcha con motivo de la conmemoración de 25 de noviembre, día internacional de la No Violencia contra la Mujer. La reivindicación se refería a la reglamentación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia para su aplicación, a la creación de nuevos Juzgados de Familia y Nuevas Comisarías, así como a la destitución del ministro Adum.

a que el 45% del presupuesto se destinase al pago de la deuda externa, restando recursos al área social. Para la CONAIE, el gobierno bucaramista habría cumplido cien días de “show, escándalo y abuso”, según dijo el portavoz Cabascango.

Simultáneamente, también los sectores laborales expresaron su desaprobación a la gestión de Bucaram, lo que significaría el abandono definitivo del apoyo a Bucaram desde grupos que habrían apostado a cierta colaboración mediada por la vicepresidenta Rosalía Arteaga. El 20 de noviembre Fausto Dután, representante del Frente Sindical, evalúa los “cien días” del gobierno de Bucaram como “cien días nefastos”, y pide al presidente que medite y cambie el modelo económico, sobre todo el esquema de convertibilidad (*El Comercio*, 1996a). Días más tarde, la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) rompió los diálogos en las mesas tripartitas –gobierno, empresarios y trabajadores– que se estaban realizando en torno al tema de la flexibilización laboral, la unificación salarial, la convertibilidad y el incremento de salarios (*El Comercio*, 1996b).

El mes de diciembre se caracterizó por una cierta calma social, debido a la celebración de las festividades de fin de año, las que, en cambio, estuvieron signadas por nuevas manifestaciones de excentricidad del presidente. Ya a inicios de enero se configura un consenso de oposición, plasmado en un acuerdo parlamentario de amplio espectro, firmado por el ultraderechista Partido Social-Cristiano, los centristas Democracia Popular (demócrata cristiano) e Izquierda Democrática (socialdemócrata), el izquierdista Movimiento Popular Democrático y *Pachakútec*-Nuevo País, brazo político de la CONAIE. Este abanico multicolor de fuerzas políticas se pone de acuerdo para exigir cambios de forma y de fondo a la administración de Bucaram, para que se declare la ilegalidad del presupuesto del Estado recientemente aprobado (pues se lo pretende financiar con la elevación de las tarifas de la energía eléctrica y la eliminación de los subsidios al gas de uso doméstico y otros combustibles), para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en contra de la privatización y, finalmente, para oponerse al Plan de Convertibilidad.

En efecto, ya en los primeros días del mes de enero fueron anunciadas la elevación de las tarifas eléctricas y la eliminación del subsidio al gas doméstico. El alza del costo de los servicios de energía sería del 30-40% para el sector industrial y comercial, y entre el 150 y 500% para el sector residencial, dependiendo de los niveles de consumo.

El Frente Unitario de Trabajadores presionaba, entonces, por conversar con el presidente “sobre el futuro del pacto social” (*El Comercio*, 1997a). El presidente se desentendía de estas advertencias y el pacto social se rompe, a pesar de la disposición de los representantes

del FUT a mantener el diálogo tripartito. A partir del 8 de enero (fecha en la que se movilizaron en Quito más de 8.000 personas) la protesta popular cobraba unanimidad y se extendía a varias ciudades del país, en particular a la ciudad serrana de Cuenca, pero se expresaba también en las provincias de la Costa y el Oriente. En adelante, la protesta se acrecentaría constantemente, y a ella se sumarían mujeres organizadas, amas de casa, activistas barriales, periodistas (en contra de agresión del Poder Ejecutivo a los medios de comunicación), artesanos (en contra del Reglamento de Facturación que se pretendía poner en vigencia), en el contexto, claro, de la movilización permanente de los estudiantes secundarios y universitarios.

En Cuenca y la provincia del Azuay la movilización fue ejemplar, pues, literalmente, “pululaban” las demostraciones de rechazo al régimen: en barrios, parroquias, anejos, las calles de la urbe. Agrupaciones sociales de toda índole engrosaron las manifestaciones sobreponiendo a la demanda general sus propias reivindicaciones: contra la instalación de una gasolinera, por la reubicación del botadero de basura, etc. (las reivindicaciones sectoriales parecen ser el móvil mayor de la protesta pública, usufructuando un espacio de expresión preparado por demandas más generales). La movilización pasó a ser coordinada por el Frente Cívico presidido por el rector de la Universidad, y conformado por 50 organizaciones provinciales.

En síntesis, la movilización, desde lo que puede ser denominado “el bloque popular” u oposición crítica (Frente Unitario de Trabajadores, Coordinadora de Movimientos Sociales y Frente Popular), venía siendo coordinada ya hace varias semanas, desde finales de 1996. De acuerdo a los consensos logrados entre estas fuerzas se definieron las siguientes metas: la no privatización de la seguridad social y las áreas estratégicas de la economía; el reconocimiento de la plurinacionalidad; el respeto a los derechos humanos, políticos, laborales y de la mujer; el impulso a la gestión ciudadana; la promoción de la convocatoria a una asamblea constituyente (Narvárez, 1997: 43).

En lo que concierne al sector empresarial, este no se decidía a sumarse al anunciado paro del 5 y 6 de febrero, aduciendo que este tendría un “tinte político”, pero también porque la desestabilización podría conducir al “vandalismo”, como se expresó la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, Joyce de Ginatta (*El Comercio*, 1997b). No obstante, a fines de enero el embajador de los Estados Unidos, Leslie Alexander, expresó públicamente que en el Ecuador “hay corrupción” en los niveles gubernamentales, lo que, al parecer, sirvió como señal para la adhesión de los sectores empresariales y financieros de la Costa a las jornadas de febrero. De todas maneras, según Guerrero y Ospina, estos sectores habrían vacilado en sumarse a

la movilización antibucaramista, debido al temor a una recapitulación de la hegemonía política de la Sierra en el nuevo gobierno (Guerrero y Ospina, 2003).

Desde mi punto de vista, la presencia de última hora (a inicios de febrero) de las cámaras de la producción, principalmente de Guayaquil, así como de los partidos de la derecha, pudo deberse también a la necesidad por resguardar el prestigio de la implementación del modelo neoliberal, que comenzaba aceleradamente a degradarse al ser impulsado por un “bufón”. Tal presencia puede, entonces ser interpretada como parte importante de la “lucha discursiva” (concepto de Stuart Hall). En todo caso dicha adhesión, por dubitativa que haya sido, sirvió para capitalizar la hegemonía de la movilización de febrero, propósito en el que los sectores empresariales y financieros fueron coadyuvados por los medios de comunicación, que visibilizaron el liderazgo de personalidades de esa extracción social y política, opacando así la iniciativa de la convocatoria hecha desde el Frente Unitario de Trabajadores y la Coordinadora de Movimientos Sociales¹³, así como sus acciones.

La señal de la radicalización de las protestas fue dada por la Coordinadora de Movimientos Sociales, organización que hizo una toma simbólica de varios días (hasta la caída de Bucaram) de la catedral metropolitana de Quito, en demanda no solamente de la dimisión de Bucaram, sino de la convocatoria a una Asamblea Constituyente (tesis que se plasmó al año siguiente) y por la formación de un gobierno transitorio de consenso. Sin embargo, la señal para la ampliación de la movilización social fue dada por el Embajador de los Estados Unidos, quien con su denuncia de actos de corrupción dio luz verde a la incorporación de las cámaras de la producción a la movilización en contra del mandatario. Con ello, se operaría un secuestro simbólico y político del rechazo a las políticas estatales (predominante, como veremos en el gráfico de la página siguiente), a favor del componente de la lucha contra la corrupción, lo que tendería a dar a la movilización un toque moralizante por sobre el carácter propiamente político. Ya en

13 Organización formada en 1996 y que aglutina a expresiones de los “nuevos movimientos sociales”, al momento de su fundación tenía como referentes a algunos sectores de la antigua izquierda. Su naturaleza y tareas fueron definidas de la siguiente manera: “La CMS es una síntesis de diversos esfuerzos organizativos y de construcción de una nueva referencia del movimiento social. Parte de la necesidad de reconocer nuestra diversidad y la consagración institucional de la plurinacionalidad: plantea el carácter estratégico del Estado y las áreas petrolera, eléctrica, de telecomunicaciones y de seguridad social e insiste en su modernización, sin privatizar. En igual forma, propone el reconocimiento de derechos colectivos, el de vivir en un medio ambiente sin contaminación, castigo a los delitos y crímenes de Estado y fundamentalmente establece como la principal riqueza de nuestro país a su pueblo” (Narváez, 1997: 44).

el transcurso mismo de la movilización, los medios de comunicación participaron activamente en la coordinación.

Desde inicios de enero ya se preparaba “la transición”: acuerdos partidarios, elaboración de la argumentación jurídica, comunicados. Tras la resistencia de Bucaram para abandonar el poder y las incesantes y cruentas manifestaciones de la población, el 7 de febrero de 1997 “Ecuador amanece con tres presidentes”: Bucaram, elegido constitucionalmente, pero depuesto por el parlamento bajo la causal de “incapacidad mental”; Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta apoyada por las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, quien firma con su puño y letra el decreto que consagraría su nombramiento presidencial, y Fabián Alarcón, ex presidente del Congreso, quien logró capitalizar el apoyo de todos los sectores parlamentarios.

¿Cuál es la significación las jornadas de inicios de febrero de 1997? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Qué es lo que ellos repudiaron? Es necesario formularse estas preguntas, debido a que, más allá de la realidad virtual construida por los medios de comunicación, tuvieron lugar procesos que no fueron tanto subterráneos, cuanto invisibilizados por la prensa de gran circulación y la televisión.

Entre noviembre de 1996 y febrero de 1997 fueron expresivas las movilizaciones de rechazo a las políticas estatales, siendo mayoritaria la manifestación de los trabajadores, seguida de “grupos locales” y organizaciones barriales. Verifíquese en el Gráfico 3 que las manifestaciones en contra de la política estatal predominan sobre las protestas en contra de la corrupción, eje discursivo de los medios de comunicación (ver también Tabla III en Anexo).

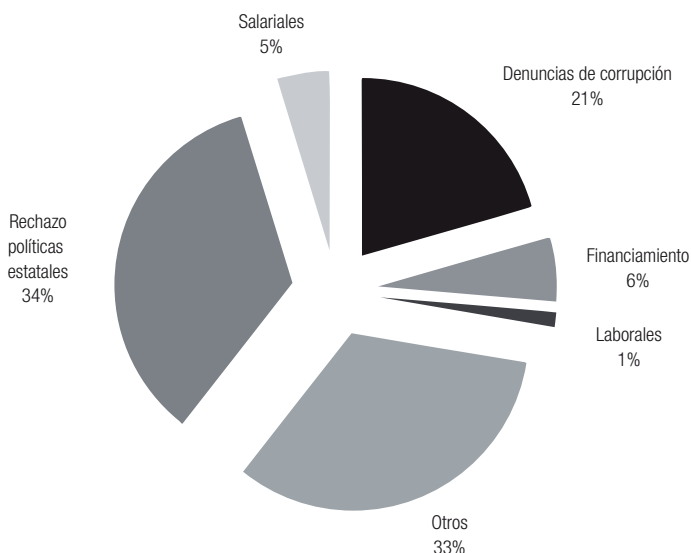
Si consideramos la importancia de la movilización del sujeto laboral, impugnador de las políticas estatales, podríamos decir que la movilización organizada, la protesta dentro de los cauces “tradicionales”, es decir, contra la política económica y la presión por la profundización del ajuste, habría primado por sobre la “posmaterialista” censura a la corrupción, a pesar de que fue este tópico el que recibió mayor atención por parte de los medios de comunicación. Otros sujetos activos fueron los representantes de los poderes locales, dada la visión centralista del gobierno y su política de confrontación con los municipios (Ibarra, 1997: 30).

Un rasgo particularísimo de la movilización en contra de Bucaram en febrero de 1997 fue la presencia de las clases altas y medias, lo que obedecería al horror que producía en ellas “el repugnante otro” (así define Carlos de la Torre la actitud de dichos sectores sociales), Bucaram y su séquito de administradores de gobierno, con una imagen que desafiaba las representaciones corrientes sobre la majestad del poder del Estado. Cabe decir que, se trató, en términos generales, de una mo-

vilización cívica de base urbana, en la que confluyeron el Frente Unitario de Trabajadores, los movimientos aglutinados en la Coordinadora de Movimientos Sociales –la Federación de Trabajadores Petroleros, la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, la CONAIE– y los partidos de todo el espectro político, y colateralmente lo hicieron también las cámaras de comercio y la producción.

Gráfico 3

Objeto del conflicto: noviembre de 1996-febrero de 1997



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

Tal unanimidad opositora, que recorría casi todos los colores del espectro político y social –sin contar, no obstante, a muchos seguidores silenciosos, incondicionales, aunque inorgánicos–, puede ser explicada por la “exacerbación de los estilos patrimonialistas y excluyentes”; mientras tanto, por otro lado, una alianza política de tal amplitud se desarrolló en medio del compromiso para diferir las privatizaciones y limitar las medidas de ajuste (Ibarra, 1997: 31).

Constatada la incidencia de la movilización del sujeto laboral y otros sectores urbanos, es interesante también otear lo que ocurría en las organizaciones indígenas. En criterio de Miguel –interlocutor presentado en el capítulo siguiente y uno de los “mandos medios”, portavoz del sentir de las bases cotopaxenses– el objetivo del levantamiento de inicios de 1997 no significaba, por parte de la CONAIE, una presión

para la renuncia, sino la petición de que Abdalá “rectifique” sus políticas y se dedique a “administrar con seriedad el país”, tanto en lo que concernía a las medidas económicas, como a la existencia del Ministerio Étnico. Miguel considera que “[...] este Bucaram también, es por culpa de él que está fuera del país, fuera del gobierno. Si él hubiese llamado a la CONAIE y dialogaba con los indígenas no salía”. De acuerdo con la versión de este interlocutor, los indígenas se habrían enterado de una expresión irrespetuosa de Bucaram proferida al ser informado sobre la movilización indígena:

Y eso se informó a la gente, la gente [se puso] más radical, se radicalizó y eso aprovecharon los políticos grandes. Ya cuando la cosa estaba dura amenazaron con [las] Fuerzas Armadas. Si que ya sabiendo que venían los indígenas, llamaba a la CONAIE, los ricos qué gente [habrían] sacado. Ahí fuimos utilizados, ya por último faltando veinte minutos para salir [...] ya hermano, venga converse. La CONAIE dijo nuestras bases están en las calles, ya no podemos hacer absolutamente nada.

Este fragmento indicaría no solamente la cautela de los movimientos de la dirigencia de la CONAIE, sino también una indefinición de posiciones de cara a las metas de transformación del modelo de sociedad propulsadas por el gobierno bucaramista y, a su manera, también por los posteriores. ¿O entró en juego una proclividad “etnopopulista” que ha ido poco a poco minando la viabilidad de un proyecto de plurinacionalidad que atendiese también los clamores por la ciudadanía y la justicia social?

Podríamos pensar que fue, posiblemente, el carácter de frente cívico en el que se disolvieron los sujetos populares lo que veló la parte propositiva de su accionar. Así, Napoleón Saltos, uno de los dirigentes políticos de oposición de mayor visibilidad durante la última década, expresó en la entrevista que nos concediera: “la caída de Bucaram fue más bien un plan de oposición, rechazo, de protesta más que un plan de propuesta”. Por otro lado, los límites de las acciones del 5 de febrero son vistos así por Iván Narváez, uno de sus más prominentes organizadores y dirigente de la Federación de Trabajadores de Petroecuador:

Frente al entrapamiento (límite de no disponer de un centro de dirección) de los movimientos sociales, la CMS no lograba transparentar sus intereses políticos en términos de propuestas nacionales y no concluyó la Agenda Programática anunciada. Se corría el riesgo de no asumir retos políticos más colectivos y menos gremiales, pero en todo caso, los movimientos sociales jugaron un rol direccionador y conductual de

la sociedad civil a través de propuestas políticas alternativas generales, tesis para el debate público y acciones relevantes como el proceso de aglutinamiento y conformación de Frente Patriótico, formulación del manifiesto del FP y concreción del “mandato” que fue entregado al presidente del Congreso Nacional, Dr. Fabián Alarcón (Narváez, 1997: 46).

En síntesis, la gran movilización de base urbana de febrero de 1997 adoleció de la ambigüedad y la oscilación entre una lucha social contra los efectos inmediatos de la crisis y el ajuste –y en tal medida es importante reconocer la existencia de un componente “antisistémico”– y un levantamiento “ético-cívico” como elemento unificador a todas las fuerzas participantes. A esta ambigüedad se asocia una reorientación discursiva en la que se funden el tópico de la lucha contra la corrupción y el acentuado rechazo de los sectores medios y altos, en alianza con los grandes medios de comunicación, al “repugnante otro”: el presidente-transgresor y advenedizo.

Se trataba de la confluencia de haces de fuerzas con diversos objetivos, diverso anclaje social e ideológico, cuya movilización sin propuesta definida dio un amplio espacio de maniobra a los sectores del bloque dominante. Aunque de todas maneras, el amplio basamento social y político de la movilización dio una tregua en el ritmo de la aceleración del ajuste.

Debemos apuntar una última, pero muy importante particularidad de las jornadas de febrero de 1997, para comprender algunos significados de la protesta de los últimos años noventa que a menudo han sido desestimados. Hernán Ibarra recuerda que los símbolos dominantes de la protesta fueron la bandera nacional con un crespón negro, la invocación a la patria y a la unidad nacional; dicho autor sugiere que la presencia de tales símbolos habría conferido a la movilización “una continuidad con lo que se ha llamado el ‘espíritu’ del Alto Cenepa” (Ibarra, 1997: 30), esto es, con los estados de ánimo que se inspiran en el conflicto bélico con el Perú de inicios de 1995. En efecto, este *leitmotiv*, aun cuando poco se enfatiza en él en la mayoría de los análisis, parece recorrer la protesta de los últimos años. Tendría también expresión en los acontecimientos de enero de 2000; y como veremos, el sentimiento de “ecuatorianidad” se hace presente en los enunciados de nuestros/as interlocutores, insistentemente, sobre todo, en los/las indígenas. Veremos también en páginas ulteriores la existencia de indicios de fortalecimiento de sentimientos de pertenencia a la “comunidad imaginada”.

Por último, uno de los saldos más importantes de los procesos de 1996 y 1997 fue la convergencia de los llamados “movimientos sociales”

y las fuerzas político-partidarias para la elaboración de un nuevo texto constitucional, que fue aprobado en 1998. Y este trajo novedades en el plano de la conceptualización jurídica de lo social y lo económico. Uno de los rasgos más salientes del nuevo marco jurídico en el plano social son el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros, en lo que concierne a la territorialidad, la preservación de tradiciones y el desarrollo, así como la protección de la familia bajo la igualdad de responsabilidades y derechos de ambos progenitores (lo cual era resultado de la movilización de los pueblos originarios y las mujeres). Ya en el plano de la regulación del sistema económico, en lugar del concepto “áreas estratégicas” –que implicaba la propiedad pública intransferible sobre ciertos recursos naturales–, la Constitución de 1998 declara con un espíritu permisivo de la potencial venta o licitación de la explotación privada de recursos naturales, en su artículo 247 del título XII “Del sistema económico”, Capítulo I “Principios Generales”, la “propiedad inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo”.

De tal manera, la movilización de finales de 1996 e inicios de 1997, a pesar de haber conseguido una tregua en los ritmos del ajuste, arrojaría un resultado poco favorable a las fuerzas promotoras de las jornadas de protesta y una victoria de las fuerzas pro ajuste, resultante de una propuesta clara sobre el país por ellas deseado, de una gran habilidad para capitalizar el carácter cívico y masivo de la protesta, así como de sacar amplia ventaja de las debilidades de los sujetos sociales y políticos críticos del ajuste.

LA GRAN MINGA

El indígena es un movimiento que a partir de un discurso que puede parecer radical, fuerza lo posible

Javier Ponce citado por Kintto Lucas

La administración del democristiano Jamil Mahuad –afianzada en la legitimidad de las urnas, a mediados de 1998– retomó la aceleración del ajuste, en el contexto de la crisis, y la aderezó con una franca cesión a favor de los grandes exportadores, los financistas y la bancocracia. Mahuad llevó el mandato de las elites económicas para profundizar el modelo de ajuste, realizando las tareas que quedaron truncas con el derrocamiento de Abdalá Bucaram: se trató principalmente del retiro de los subsidios al gas, la elevación de los precios del combustible, la dolarización o convertibilidad, la reforma tributaria y las privatizaciones pendientes. Recordemos también que dicho gobierno fue el autor del tristemente célebre “feriado bancario” de marzo de 1999 que congeló

los depósitos bancarios de la población ecuatoriana. Se incrementó, como veremos, el tono de la protesta y los ejes de la movilización se desplazan hacia el campo, sobre todo a partir de mediados de 1999, para desembocar en el derrocamiento de Mahuad, el 21 de enero de 2000. ¿Cuál fue la situación que configuró una conmoción socio-política de esa magnitud?

Un excelente análisis del “contexto desencadenante” nos lo ofrecen Fernando Guerrero y Pablo Ospina (2003). Según estos autores, las vicisitudes políticas de la segunda mitad de los años noventa, tales como el movimiento de febrero de 1997, el fracaso de la solución de gobernabilidad lograda en la Constitución de 1998, y la crisis económica, habrían reforzado una lectura de la crisis, por parte de la CONAIE –a la sazón dirigida por Antonio Vargas– y la Coordinadora de Movimientos Sociales, como una oportunidad para la acción extrainstitucional radical. Por otra parte, en la crisis habrían confluído factores acumulados desde el inicio del ciclo recesivo de inicios de 1995: el desajuste fiscal generado por la guerra del Cenepa; la caída drástica de los precios internacionales del petróleo (desde 15 dólares el barril en noviembre de 1997 hasta 7 dólares en diciembre de 1998) con el consecuente desfinanciamiento del Presupuesto General del Estado; las devastaciones producidas por el fenómeno de El Niño. Todos estos factores incidirían en una crisis fiscal que impedía el pago a los empleados públicos, por lo que la agitación social iría en ascenso (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

La crisis bancaria de 1999 merece una puntualización especial. Según la analista Wilma Salgado (citada por Guerrero y Ospina, 2003), entre agosto de 1998 y febrero de 1999 el Banco Central habría transferido cerca de 1.000 millones de dólares para evitar la quiebra de algunos bancos (700 millones solo al Filanbanco), dinero que habría sido utilizado para especular con el dólar y aumentar sus utilidades derivadas de compra y venta de divisas. Bajo amenaza de fuga de capitales, el Banco Central eleva las tasas de interés, hasta el 180%, en febrero de 1999. Fue decretada la flotación del dólar, con la consecuente devaluación del sucre. Frente a la inminencia de hiperinflación, el gobierno de Mahuad decretó el feriado bancario, con un congelamiento de depósitos que afectó a toda la población y tuvo efectos profundamente recesivos sobre la economía, aun cuando frenó la tendencia alcista del dólar. Y la espiral de la debacle continuó, porque al gobierno no le quedó más que el endeudamiento externo e interno y la emisión monetaria, lo que llevó a niveles exorbitantes de devaluación e inflación. Ahora bien, ¿cómo fue posible esta catástrofe? se preguntan Guerrero y Ospina, y ubican su causa en la confluencia de la desregulación financiera asociada a la liberalización de la economía,

con la profunda crisis económica y fiscal latente desde 1995 (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

En estas circunstancias la población habría sido presa “de una situación social de desamparo” (Guerrero y Ospina, 2003), acompañada de indignación por el servilismo del gobierno frente a las elites económicas. Y fue así que la inquietud social se intensificó en el mes de enero de 1999, en medio del anuncio de un recorte presupuestario que lesionó el gasto social, del congelamiento de sueldos, de la quiebra de bancos y su salvataje apuntalado desde el Estado, y de la elevación de la cotización del dólar. Desde las esferas del Estado se hablaba, además, de nuevos impuestos (como el 1% a la circulación de capitales), y de liberalización del precio de los combustibles. A mediados de febrero se decretó la flotación del dólar norteamericano y el precio de la divisa subía sin control. Ya en el mes de marzo, cuando se decretó el congelamiento de los depósitos, se acentuaron algunos elementos que eran germinales en 1997: la crisis fiscal (el déficit fiscal alcanza el 7%), y la caída del sistema bancario.

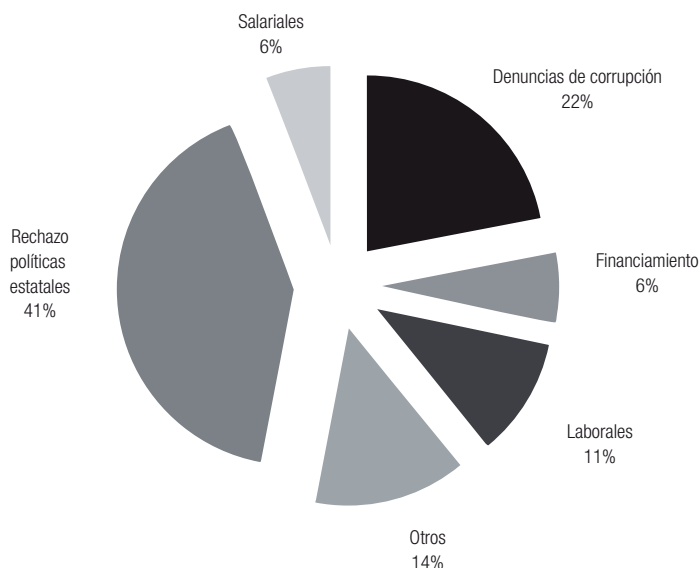
Nuevamente la protesta volvía a las calles de las urbes ecuatorianas y las carreteras eran otra vez bloqueadas. En efecto, en el cuatrimestre de marzo-junio de 1999 la tónica del conflicto tuvo apogeo, y no solamente con relación al período de gestión de Bucaram, sino en comparación con otros períodos del ciclo de intensificación del ajuste, momento que fue superado solamente por la conflictividad social del cuatrimestre de noviembre de 2000 a febrero de 2001. El sujeto colectivo más intensamente movilizado fue nuevamente el laboral (trabajadores y sindicatos), seguido de los estudiantes, y sólo en tercer lugar –en cuanto a la cantidad de eventos– el sujeto indígena y campesino promueve manifestaciones de rechazo al gobierno (Gráfico 1). Hay que señalar, además, que debido al impacto generalizado de las medidas económicas, hubo una gran efervescencia de movilizaciones de organizaciones de perjudicados por las quiebras bancarias, manifestándose en general una gran beligerancia en contra del congelamiento de los depósitos. El tópico predominante durante este período era el “rechazo a la política estatal”, que apuntaba al gobierno como tal y se enfilaba básicamente contra el congelamiento de los depósitos y los métodos de salvataje estatal para la solución de la crisis bancaria; seguido del rubro “denuncias por corrupción”. Desde la perspectiva de los analistas de la revista *Ecuador Debate*, las persistentes movilizaciones, aun de sectores como el funcionariado de misiones diplomáticas en el exterior, cuyos salarios se habían deteriorado notablemente, eran “señales elocuentes del intenso desgaste del Estado-nación, de su incapacidad para equilibrar soluciones técnicas y arreglos políticos de largo alcance para crear mínimos márgenes de certeza, previsibilidad y movilidad a los actores sociales” (CAAP, 1999b: 37).

Después de este pico de la protesta, en el contexto de lo que sería una aparente declinación de la conflictividad social, advino el desenlace del 21 de enero de 1999. Ese acontecimiento tuvo relación inmediata con el anuncio de la dolarización realizado por Mahuad. Además, estuvo configurado por la acumulación de inconformidad con los efectos del congelamiento y la evidencia del alineamiento del mandatario a favor de la “plutocracia”, pero sobre todo con el mencionado deterioro de la capacidad estatal para lograr soluciones políticas y técnicas frente a la plétora de conflictos.

Antes de analizar las circunstancias de enero de 2000, demos un vistazo al tenor de las reivindicaciones de ese período, en especial durante finales de 1999 e inicios de 2000, como observaremos en el siguiente gráfico (ver también la Tabla III en Anexo).

Gráfico 4

Objeto del conflicto: noviembre de 1999-febrero de 2000



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

Observamos aquí la gran presencia en ese entonces del rechazo a las políticas estatales, cuyo índice supera al manifestado durante los últimos meses del bucamato, pues el porcentaje de conflictos se eleva del 34% al 41% (ver Tabla III en Anexos), lo que se explicaría, como se ha mencionado, tanto por la insistencia en el cambio de régimen monetario, como sobre todo por los efectos del feriado bancario. Por otra par-

te, el rubro “denuncias por corrupción” mantiene un “empate técnico” con las realizadas contra la administración de Bucaram. Finalmente, uno de los aspectos sociales más afectados durante este período es el trabajo, por lo que la incidencia de la conflictividad laboral ha crecido del 1% al 11%, en comparación con el período final del gobierno de Bucaram. En síntesis, estos datos indicarían un agravamiento de la crisis, no solamente por la férrea voluntad de profundizar el ajuste o por los desaciertos en la resolución de la problemática social y económica, sino también por los niveles de desaprobación a las políticas de gobierno.

¿Qué ocurría en el mes de enero de 2000? ¿Qué ambiente se vivía en el país?

El anuncio de la dolarización provocó el rechazo de la mayor parte de la opinión pública, incluidos algunos empresarios serranos; según la encuestadora Market, el 54% de la población habría sido contraria a ella (Lucas, 2000: 92). Ocurre una escalada del precio del dólar –junto con su acaparamiento– acaecida probablemente debido a la libre emisión de moneda por parte del Banco Central, a fin de hacer frente a las deudas de los bancos que fueron asumidas por el Estado. No es de descartar una escalada artificial de la moneda, pues según la autorizada voz del analista León Roldós Aguilera: “la impresión es que le dieron palo al dólar para que suba, y habría que ver quiénes compraron divisas en esos días, ya que hicieron el negocio del siglo porque ahora vale 30 por ciento más” (citado en Lucas, 2000: 91)¹⁴.

El gobierno de Mahuad alcanzó altos índices de impopularidad. Según la encuestadora CEDATOS, el 53% de la población se habría manifestado por la renuncia del presidente, mientras que el 42% por la rectificación de rumbos (Lucas, 2000: 92). Y a propósito del contenido de la demanda de rectificación de rumbos, es interesante hipotetizar sobre las representaciones que las estructuran a partir del testimonio de Pablo, un estudiante cuencano de 15 años (interlocutor que será

14 Un texto de Perry Anderson ilustra muy elocuentemente que la crisis económica y la inflación no solamente podría tener un carácter artificial, sino que podrían éstas ser deseables, con miras a imponer soluciones radicales que desbrocen el camino a la reestructuración neoliberal y tornen irreversibles sus consecuencias, como es el caso de la dolarización en nuestro país, aceptada por muchos como un mal menor frente a la inestabilidad cambiaria de ese período. Anderson relata que en cierta ocasión, durante una conversación en Río de Janeiro en 1987, un colega neoliberal brasileño, “economista destacado y gran admirador de la experiencia chilena”, se habría sincerado acerca de su visión sobre lo que el consideraba el problema crítico del Brasil durante la presidencia de Sarney. Este problema, decía ese economista, no es una tasa de inflación demasiado alta, como creía la mayoría de los funcionarios del Banco Mundial, sino una tasa de inflación demasiado baja; así pues, desde el punto de vista de ese economista, habría sido deseable una hiperinflación a fin de que “los diques se rompan” para “condicionar al pueblo a aceptar la drástica medicina deflacionaria que falta en este país” (Anderson, 1999).

presentado en el Capítulo III), quien expresaría los ánimos de sectores urbanos. De acuerdo con este interlocutor,

La protesta que se dio no era destinada a botarle a él [Mahuad], lo que se quería era la derogatoria de las medidas y que no se dé la dolarización, entonces se dio una serie de factores, como el que el ejército se unió a los campesinos, tomaron el Congreso y se podía ver que era una cosa que cogió de sorpresa, pero como ya estábamos en el Congreso pero sin manifiesto, fue una cosa repentina.

Los motivos de tal estado de ánimo habrían sido su “disimulo” en los actos de corrupción; así, al ser invitado a analizar las diferencias entre la impugnación a Bucaram y a Mahuad, Pablo confirma la existencia de las mismas:

[...] a Abdalá lo quisimos botar todos, las cosas eran demasiado: él robaba de frente, al hijo le manda a las aduanas y muestra que adquirió su primer millón de dólares que ha robado. Mahuad en cambio era un mal presidente pero era más tapado, si se robaba era más tapado, no hacía tantas payasadas. Las dos cosas están mal, no se debería hacer ninguna pero en todo caso la gente acepta más que le roben por atrás que le roben de frente. Esos comentarios he oído en algunas veces en el bus.

En esta ocasión la movilización tuvo una lógica distinta a la subyacente tras la impugnación a Bucaram, pues mientras este habría gozado de mayor condescendencia de los sectores indígenas, Mahuad la tendría frente a sectores urbanos. Probablemente, tal situación obedezca a la textura de las identificaciones políticas generadas en uno y otro caso, aunque también, según la lectura de Guerrero y Ospina, es justamente el anuncio de la dolarización lo que habría permitido a Mahuad recomponer momentáneamente su bloque de apoyo, así como también tranquilizar a los sectores medios urbanos, temerosos de la hiperinflación, o al menos ponerlos en compás de espera (Guerrero y Ospina, 2003).

Entonces, en el nuevo momento, a pesar de lo drástico de las medidas económicas, el espectro de fuerzas sociales movilizadas fue menos amplio que en febrero de 1997, pues en los sectores medios urbanos no tuvieron la presencia masiva de aquel entonces. La protesta se concentra en la CONAIE, en primer lugar, pero también son convocados diversos sectores, tales como: sindicatos del sector público, estudiantes, organizaciones de profesionales, Iglesia, ONG, organizaciones de mujeres, representantes de organismos de derechos humanos, es decir, sectores claramente “politizados”. Todos ellos confluyeron en la constitución del Parlamento de los Pueblos del Ecuador, instancia

conformada en varias localidades serranas, en forma paralela y como alternativa al Congreso Nacional. Desde el 19 de enero algunos sectores se involucraron de manera activa a las presiones en contra del gobierno: los trabajadores de Petroecuador, por ejemplo, dejaron de bombear crudo desde la Amazonía hacia la refinería de Esmeraldas, impidiendo el embarque para la exportación y la distribución de combustibles (Lucas, 2000: 106).

Los indígenas por su parte, tras varios días de camino a pie por vías secundarias desde sus comunidades en las provincias aledañas, iban llegando a Quito para acampar en las cercanías del Congreso Nacional. El gobierno de Mahuad reaccionó reprimiéndolos, y apresando a más de cien dirigentes. Era notable el carácter de la represión, que fue denunciado como “rebrote de racismo”, pues se procedió a desalojarlos de los medios de transporte, tratando de impedir su entrada en la capital. En otra ciudad serrana, Cuenca, en esos días hubo una impresionante marcha de unas 35 mil personas.

Las jornadas de enero de 2000, a diferencia de las de febrero de 1997, a criterio de sus organizadores, habrían tenido varios elementos de ventaja, desde el punto de vista organizativo. En primer lugar, habría contado con una estrategia insurreccional, según expreso Napoleón Saltos en la entrevista que nos fue concedida. Los elementos de tal estrategia, además de la alianza con las Fuerzas Armadas, habrían sido “aislar al poder” [el Ejecutivo], “aislar a los partidos políticos que son partidos parlamentarios y electorales, sin base social, para que ellos no sean los que decidan”. (Nótese que esta postura ante los partidos políticos difiere de la actitud más conciliadora que mantendrían miembros de base del movimiento indígena, a juzgar por uno de los testimonios analizados en el siguiente capítulo). De otro lado, surgiría el sustento político de la insurrección, una suerte de poder paralelo encarnado en el Parlamento de los Pueblos del Ecuador con eje en la CONAIE, y configurando la iniciativa desde el campo hacia la ciudad.

Con todo, a pesar de promover la impugnación a los tres poderes del Estado, en el proyecto de poder desplegado en enero de 2000 habría predominado una visión eminentemente moral, y no claramente política. Las palabras del religioso Luis Alberto Luna Tobar, cercano a los sectores movilizados, ponen de relieve estas ambivalencias: “el pueblo no pide el quiebre de las instituciones. Solo pide que estas se pongan al servicio de las grandes mayorías para que sea una verdadera democracia” (citado en Lucas, 2000: 109) (las mismas ambivalencias se expresarán en la visión de ciertos sectores de base de la CONAIE, que analizaremos en el siguiente capítulo).

Más allá de las vacilaciones de la coordinación del levantamiento, y de los reveses y el desconcierto debido al desplazamiento de los

coroneles Gutiérrez y Cobo por el general Mendoza, ¿por qué una movilización de tal magnitud no logró revertir la dolarización, a pesar de la estrategia insurreccional que, se dice, existió? ¿Por qué en meses posteriores no se pudo activar la movilización y realizar un nuevo levantamiento, tal y como se anunció para abril, y luego se difirió para septiembre de 2000?

Por otro lado, a pesar de la diafinidad de los planteamientos en torno a “una línea de defensa del patrimonio nacional y a la oposición a las privatizaciones con el tema del trabajo o el derecho a no ser despedido y el de tener un salario”, como manifestó Napoleón Saltos cuando lo entrevistamos, a pesar de la nítida oposición a la dolarización, la coordinación no habría delineado un programa de gobierno claro. Sobre todo, el perfil conspirativo y “antipartidista” de la organización habría limitado la base de alianzas políticas y sociales que la sustentó. Conuerdo, por otra parte, con Guerrero y Ospina, cuando manifiestan que la salida de Jamil Mahuad y el nombramiento constitucional de Gustavo Noboa, habría sido planificada para retirar a un mandatario incómodo que obstaculizaba la implementación del ajuste, con lo que de paso se encontraría una salida a la crisis (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

En la conducción del movimiento del 21 de enero del año 2000, cuando la alianza insurgente indígena-militar derrocó a Mahuad, se habrían cometido, ante todo, errores de apreciación de las dimensiones y posibilidades reales de la movilización. Y este análisis fue suplantado por la planificación de la insurrección como tal, es decir los elementos instrumentales y tácticos de la planificación obscurecieron al análisis político-estratégico. De manera que la consigna del 21 de enero, la formación de un gobierno popular con sustento militar, resultaba imposible, pues se habría sobreestimado la propia capacidad de movilización, así como el compromiso del Ejército; pero sobre todo no habría existido la capacidad de reconocer las debilidades estructurales de la conjura: la debilidad regional e internacional (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo V).

Ahora bien, ¿cómo fue posible esa alianza entre indígenas y militares que a los ojos de muchas personas parecía extraña? Consideramos que algunos sectores indígenas son portadores de un proyecto de nación (plurinacional, desde luego), lo cual habría facilitado la alianza con los sectores militares. Desde el punto de vista de, al menos, un sector de los militares participantes en la gesta del 21 de enero, lo que habría es una especie de identificación horizontal con la movilización indígena. Ya en las palabras del coronel Mario Lascano podemos destacar una configuración de los siguientes elementos que sustentarían tal

identificación: rechazo a los políticos tradicionales¹⁵, a una democracia extranjerizante y disfuncional para el entorno cultural nacional¹⁶, nacionalismo definido a base de la autarquía político-económica del país, de la exaltación de la indianidad y el mestizaje y del rechazo al “otro” venido de ultramar, a su protagonismo político en el país¹⁷ (nacionalismo emparentado con autoctonismo¹⁸); este sector se declara, asimismo, partidario de métodos drásticos de gobierno¹⁹, condena al neoliberalismo y su adscripción a un origen externo²⁰, apuesta al rol del Estado en la gestión del desarrollo²¹. Un punto medular de la iden-

15 Este actor de 21 de enero de 2000 justifica su participación en la asonada, por los “políticos que no habían cambiado en nada su repugnante discurso; un pueblo apático y aburrido de su propio destino; unos sectores sociales confundidos en las redes de sus propias incongruencias y un Estado atascado, sin timón ni timonel de proa, pesado y corroído en sus propias articulaciones” (Lascano, 2001: 37).

16 El tenor autoritario del pensamiento de ciertos sectores militares puede evidenciarse en el citado texto de Lascano “La democracia es una forma de gobierno; no la primera ni la más óptima, como quiere catalogarla obstinadamente el etnocentrismo occidental. Es una forma de gobierno que debe adaptarse eficientemente al entorno cultural en que va a ser aplicada. Las democracias de los pueblos amerindios eran casi perfectas composiciones de una estructura social equilibrada. [...]. No es cierto que existan formas de gobierno buenas o malas; Malinowski demostró que las sociedades van creando sus propios órganos, capaces de satisfacer sus propias necesidades. Cuando los órganos sociales o estatales no funcionan o no satisfacen sus necesidades, la misma sociedad tiene tendencia a eliminarlos. He ahí el problema de las dictaduras, tan proliferantes en Latinoamérica (aunque los norteamericanos se esfuerzan por no permitirlos; no mirando sus pecados de la época en que las fomentaban). La democracia será la mejor forma de gobierno en cuanto sea capaz de adaptarse a nuestros entornos culturales” (Lascano, 2001: 33).

17 “Los países pobres como el nuestro, lo que deben hacer es diseñar sus propias estrategias y modelos de toda índole, diseñar a su propia medida y con sus propios recursos. No podemos deslindarnos del concepto de la economía al servicio del hombre, humanitaria, que dignifique al hombre” (Lascano, 2001: 79).

18 “El bien nace de manera autóctona, y solo puede ser construido por hombres de esta tierra: soldados solidarios, dignos, multifacéticos e indígenas” (Lascano, 2001: 75).

19 “Al pueblo esta democracia enfermiza no le da alternativas; lo tiene ‘achagnado’ a la estaca de su ignominia. [...] La aplicación de la pena de muerte por traición a la patria, fue el gran secreto de los grandes estadistas. [...] Rocafuerte ejecutó a más personas que todavía que García Moreno, Alfaro los fusilaba al estilo Pedro el Grande (por escogitamiento). De esta manera las cosas marchaban por las buenas o las malas, buscando el fin último de la política: el bien común” (Lascano, 2001: 42-43).

20 “Nuestro país ha adoptado un modelo económico neoliberal: cruel, inhumano, individualista; ajeno a nuestra naturaleza latinoamericana. Justamente hablamos de que ese es el problema de todos los países tercermundistas: ser incapaces de generar un propio modelo económico, a nuestra medida; considerando nuestra potencialidad material y humana” (Lascano, 2001: 79).

21 “Esa tarea le compete al Estado y a la burocracia. Quienes se empeñan en desmantelarlos olvidan que: ‘El estado para los más prominentes geopolíticos es una entidad que

tificación con la movilización indígena provendría del reconocimiento a la capacidad organizativa y movilizatoria exhibida por la CONAIE en los levantamientos y a estrategias que se consideran similares a las militares (Lascano, 2001: 91).

Así, la alianza entre militares e indígenas no fue un encuentro de ocasión, sino que se sustentó en afinidades mayores, tales como el rechazo a las consecuencias extremas del modelo neoliberal y la empatía en aspiraciones e intereses nacionalistas, aunque de manera diferente (más allá, claro, de que la figura central del gobierno del 21 de enero, Lucio Gutiérrez, haya asumido orientaciones políticas opuestas). Pero el acuerdo se tornaba posible también a merced de la relación, que data desde 1990, entre los mandos medios de las Fuerzas Armadas, y las organizaciones indígenas, a través del capitán Sandino Torres (Virgilio Hernández, citado en Guerrero y Ospina, 2003).

Por otro lado, importantes entretelones para la participación militar el 21 de enero ofrecería la firma del tratado de Brasilia que ponía fin a los diferendos limítrofes entre Ecuador y Perú. Al menos así podría haber sido desde el punto de vista de un sector de militares:

Y el primer error que cometió el Dr. Mahuad fue imperdonable para las Fuerzas Armadas. Él pensó que el asunto territorial se podía manejar en forma liviana y apresurada. Hizo exactamente lo que quería Estados Unidos y lo que pretendía Perú: firmar una paz endeble y entreguista [...] Recuerdo cuando se firmó la paz en Brasilia. Fue un día negro para la Academia de Guerra, los oficiales se veían nerviosos y afligidos, inquietos, la mayoría de ellos había combatido en el Cenepa (Lascano, 2001: 53).

Esbochemos, para finalizar esta sección, el patrón general de las movilizaciones del 21 de enero. A diferencia de las jornadas de febrero de 1997, la iniciativa de la movilización la tienen los pobladores rurales y, sobre todo, las bases de la CONAIE, entre las que desempeñaron un papel central las organizaciones de la provincia del Cotopaxi. En segundo lugar, la base de alianzas es más restringida, descartando un acuerdo político amplio y apostando, más bien, a la acción conjunta de campesinos-indígenas y militares, coadyuvados por sectores urbanos aglutinados en torno a la Coordinadora de Movimientos Sociales. Tercero, durante esta jornada predominó el tópico “antisistémico”, expresado con fuerza y radicalidad, llegando a pedir la reorganización de los poderes del Estado y la reversión de la dolarización; sin embargo, tal

hay que fortalecerla. A través de él, el país irradia poder o debilidad frente al contexto mundial” (Lascano, 2001: 49).

carácter “antisistémico” se presenta limitado, en la medida que no se trata de la demanda misma de reforma de las instituciones del Estado, sino de la sustitución de los personeros que las componen, expresado, desde luego, de manera radical, en lenguaje impugnatorio. Cuarto, el enunciado de lo nacional continúa estando presente, aunque esta vez se condensa en la “esencia” de la nacionalidad, los pueblos originarios, y en las Fuerzas Armadas; al menos tal parece haber sido uno de los sentidos rectores de la participación de los mandos medios militares. Quinto: por último, en la protesta indígena comienza a acentuarse el enunciado universalista, la demanda de respeto a lo público, la exigencia de derechos sociales subyacente al cuestionamiento de las políticas de ajuste; en tal sentido hay una línea clara de continuidad del sentido de la protesta con los pronunciamientos de enero de 2001.

DECRESCENDO TUMULTUOSO

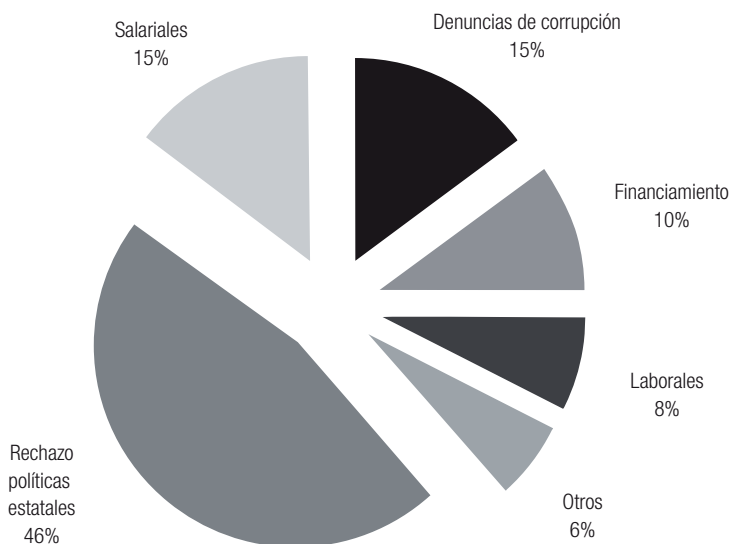
Como resultado de los eventos del 21 de enero de 2000, asumió la presidencia el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, cuya misión fundamental fue llevar adelante el plan de dolarización de la economía. Se trataba, en realidad, de un personaje gris en el que las elites cifraron expectativas de gobernabilidad, a través de una “dolarización sin Mahuad”. Por otra parte, en la construcción de la imagen política de Noboa, el poco “carisma” del mandatario fue traducido como “profesional de un talante tranquilo y una hoja de vida impecable”; es decir, se lo representaba como un cruzado pacífico en contra de la corrupción, pretendiendo atribuirle una capacidad para la solución de los problemas del país, aun cuando era de dominio público su vinculación a la plutocracia y la extrema derecha guayaquileña, así como su sesgo económico orientado claramente hacia las privatizaciones (su hermano, Ricardo Noboa Bejarano, es uno de los adalides de las privatizaciones, y a la sazón fue nombrado director del Consejo Nacional de Modernización, CONAM).

En todo caso, Noboa procuró limar asperezas con los sectores insurgentes asignando la cartera de Bienestar Social a Luis Maldonado, eximio representante de la intelectualidad indígena. Por otro lado, como recordaremos, el presidente realizó visitas a las provincias entregando fondos para obras, con ocasión de las celebraciones locales. El cuadro general de la conflictividad fue de descenso de la misma, y a pesar de que en los primeros meses de la gestión de Noboa es eliminado el sucre como moneda nacional, y entra en plena vigencia la dolarización, no logran concretarse los intentos de alzamientos indígenas, cuya programación fue siendo postergada.

Un nuevo y súbito ascenso de la conflictividad se hizo presente hacia finales de 2000, siendo los protagonistas centrales los indígenas y los estudiantes, particularmente los secundarios. Como muestra el

siguiente gráfico, en el cuatrimestre noviembre 2000- febrero 2001 se manifestó una primacía incontestable del rechazo a las políticas estatales (dolarización y sus efectos), seguidos de conflictos “salariales”, y de denuncias contra la corrupción (ver también la Tabla III en Anexo).

Gráfico 5
Objeto del conflicto: noviembre de 2000-febrero de 2001



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

Si observamos el Gráfico 5 y lo confrontamos con el correspondiente al del contexto de la impugnación de Mahuad, veremos un crecimiento notable de la inconformidad con las políticas de gobierno, así como con la situación social en general, lo que se expresaría por ejemplo en el crecimiento de la conflictividad en torno a los salarios. Sin duda, comenzaban a sentirse los efectos inflacionarios de la dolarización, que promovió la práctica del “redondeo” de precios, y sus impactos en las condiciones generales de vida de la población.

Estas tensiones acumuladas llevaron a un nuevo levantamiento indígena que se convertiría en el evento estelar de la contestación al avance, ahora radical, del ajuste estructural y de la imbricación profunda con la economía norteamericana. El levantamiento indígena de enero-febrero de 2001, que proclamó “Nada sólo para los indios”, acontecía, pues, tras una relativa calma, generada tal vez por las expectativas del diálogo y las negociaciones con el gobierno de Noboa,

expectativas rotas tras el estancamiento de los diálogos y el anuncio de un nuevo paquete de medidas económicas. Nuevamente se inician las protestas de sectores urbanos, básicamente de estudiantes y pobladores. A las protestas de la población urbana, desde el 22 de enero se sumó el cierre de carreteras.

El gobierno, entonces, decidió “que el manejo político de la crisis se lo asuma directamente desde el Ministerio de Defensa y una línea dura desde el Ministerio de Gobierno. Esta delegación a la fuerza policial y militar restó capacidad política de negociación al régimen, a la vez que exacerbó la crisis” (ICCI, 2001: 97). Se habría recurrido a tal delegación en respuesta al clamor de las elites, particularmente del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, conspicuo ideólogo de la derecha, en el afán de “suprimir el efecto político de los levantamientos indígenas” (ICCI, 2001: 98). La disposición presidencial trajo consigo una secuela de violencia y represión, lo que detonaría definitivamente la movilización indígena, desarrollada en medio del estado de emergencia:

Es a partir de este inusitado despliegue de violencia, que las estructuras organizativas del movimiento indígena deciden realizar un levantamiento en contra de las medidas económicas aplicadas y en contra de la represión y la violencia (ICCI, 2001: 97).

Miles de indígenas llegaron a Quito para acampar en la Universidad Politécnica Salesiana el 27 de enero, donde permanecieron hasta la suscripción de los acuerdos con el gobierno. La universidad fue cercada por efectivos policiales y cortados los servicios de agua, luz, teléfonos. El movimiento de protesta no solamente se vio confrontado con la represión del régimen, sino también con amenazas con tintes racistas. “A esto se suma la aparición de perros muertos ensangrentados con la leyenda: ‘están jugando con la muerte, manueles’” como de manera despectiva, a la sazón, se bautizó a los indígenas (Lucas, 2001: 119). El saldo de las jornadas fueron cuatro personas muertas, treinta heridos y doscientos presos, incluido el dirigente amazónico Antonio Vargas, entonces presidente de la CONAIE y actor de los ya relatados eventos del 21 de enero de 2000. El levantamiento concluyó el 7 de febrero, con la firma de un acuerdo de veintiún puntos entre los indígenas y el gobierno. En un sentido general, el tenor del acuerdo giraba en torno a la no revisión durante el lapso de un año de las tarifas de transporte y los precios del cilindro de gas y los combustibles, a la reestructuración y capitalización del Banco Nacional de Fomento para facilitar los créditos al sector agrícola, al impulso a los mecanismos jurídicos para la recuperación por vía coactiva de los recursos entregados a la banca, y el respaldo a los procesos de extradición solicitados por el Gobierno

Nacional, al incremento de financiamientos a los organismos indígenas (Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos del Ecuador, CODENPE, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, etc.), al impulso a los procesos de descentralización profunda del Estado, la búsqueda de consensos para la reforma a la Seguridad Social, y el pago de la deuda al Seguro Social campesino. Se pactaba, por otro lado, no admitir la regionalización del Plan Colombia ni involucrar al país en un conflicto ajeno, así como un trato especial a todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador –especialmente a los de la región amazónica– para su desarrollo (Lucas y Cucurella, 2001: 203-205).

El acuerdo de veintinueve puntos suspendía temporalmente el ímpetu del ajuste. Advino entonces una relativa calma rota a fines de 2001 por las renovadas intenciones del gobierno para privatizar las empresas comercializadoras de energía eléctrica, los intentos de incrementar los precios de los combustibles, el gas, las tarifas de energía eléctrica y el transporte público. Se preveían, además, la disminución del impuesto a la renta y el incremento del impuesto al valor agregado (IVA)²². El asunto de la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica fue altamente polémico y recibió la crítica de amplísimos sectores sociales, políticos y colegios profesionales, pues las condiciones de tal venta no eran lo suficientemente diáfanos. Se planteó, de nuevo, la amenaza de un nuevo levantamiento indígena para los meses de febrero-marzo, respaldado por los sindicatos de las empresas eléctricas y otros sectores laborales (como los empleados del Seguro Social opuestos a su privatización), así como por el estudiantado. Ante la objeción generalizada, el gobierno de Noboa retrocedió, evitando en adelante exacerbar los ánimos de las fuerzas opuestas a tal venta. Es decir, Noboa no consiguió tomar grandes decisiones, las protestas disminuyeron y los niveles de conflicto declinaron bruscamente, al mismo tiempo que las decisiones para la continuación con la intensificación del ajuste quedarían aplazadas para el próximo gobierno. En todo caso, la pacificación llevada adelante por Noboa parece haber dado ciertas bases para la gobernabilidad, al menos temporal.

Posteriormente, durante el gobierno de Gutiérrez, asistimos ya a una reconfiguración del campo ideológico y político, a la transformación del esquema de alianzas políticas, a la fragmentación de la unani-

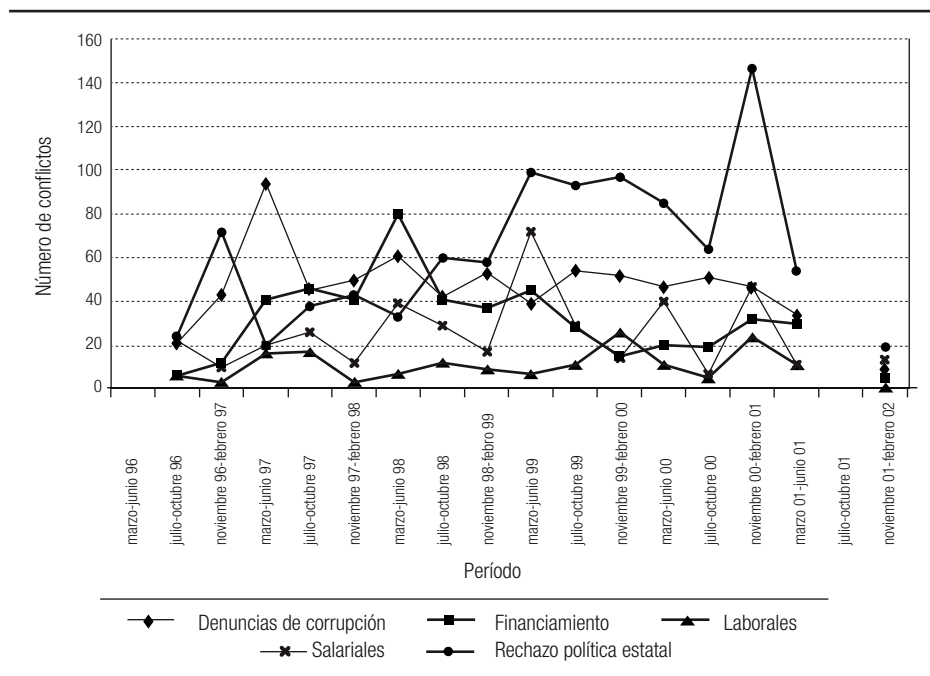
22 Según el Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI), en esa época se habría estado gestando un proceso de cuestionamiento de las bases a sus dirigentes por su alejamiento de los procesos político-organizativos. Esto llevaría a resolver la reestructuración interna de la CONAIE, lo que habría dado pie para una interpretación, de parte del gobierno, de que la organización indígena nacional puede entrar en un proceso de división interna. En tal circunstancia se decide el anuncio de anuncio de las medidas (ICCI, 2001: 96).

midad indígena y a otros síntomas de conclusión del ciclo político y de protesta. Y quién sabe: de cara al desgaste del repertorio de protesta expresado en el levantamiento indígena (de la misma manera como otrora se degradó la eficacia de la huelga laboral), presenciaremos tal vez nuevos repertorios y formas de contestación, nuevas fuerzas en la palestra de la política nacional (la gran protesta de los/las jubilados/as, por ejemplo, en el 2004, expresando la dimensión etárea de la pauperización galopante). La resistencia al deterioro de lo político y lo social deberá, entonces, ser pensada bajo nuevas pautas.

CONCLUSIONES

A manera de síntesis de la situación de conflicto y protesta beligerante de las fuerzas opuestas al ajuste estructural, deseamos recalcar, antes que nada, que durante el período analizado, la agudización del conflicto distributivo se ha acompañado básicamente de un creciente repudio de las políticas de gobierno, como podemos observar en el siguiente gráfico (ver Tabla III en Anexo).

Gráfico 6
Dinámica del objeto del conflicto



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

¿Cómo interpretar el predominio creciente de la crítica a las políticas de gobierno por sobre otros aspectos de la protesta? Sugiero que, pese a no lograr el diseño de una propuesta del modelo de sociedad, las fuerzas movilizadas se han inspirado en una comprensión de las implicaciones del modelo económico y político que se ha instaurado, aun cuando tamizada de importantes dosis de “economía moral”. Observamos también que la protesta debida a la corrupción tampoco ha sido predominante durante el período, lo que abona un criterio sobre el carácter político de la movilización, aunque, desde luego, no podemos desconsiderar los componentes morales de la insurgencia. Así, pues, las demandas universalistas y críticas al modelo económico en marcha (en contra de las medidas impositivas, monetarias, de restricción del gasto público, despidos masivos, etc.) habrían prevalecido, como tendencia general, por sobre otras demandas sociales: sectoriales, salariales y laborales. No obstante, la perspectiva lograda sobre el peso del modelo económico y social como factor del déficit de ciudadanía social, no se ha acompañado de una propuesta estratégica de organización social.

En lo concerniente a las características de la movilización como tal, del análisis anteriormente realizado cabe resaltar la frecuencia de los reclamos generados por el sujeto sindical, cuya protesta se expresaría, sin embargo, de manera fragmentada, en comparación, por ejemplo, con la unanimidad de la movilización indígena.

Luego es menester reconocer la presencia estudiantil, pues han sido precisamente ellos, sobre todo los secundarios, en varias oportunidades los pioneros de la protesta, tanto en razón de la supervivencia al menos formal de su estructura organizativa a nivel nacional (la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE), como de las relativas facilidades para su convocatoria a partir de la confluencia en los locales de estudio.

Notamos, por otra parte, la aparente secundariedad de la presencia indígena en momentos pico de la conflictividad, si esta es vista desde un criterio cuantitativo. La excepción se da únicamente en el período noviembre 2000-febrero 2001, cuando los indígenas expresaron reivindicaciones más generales, y no específicamente étnicas. Dichos sectores sociales no tuvieron una expresión contundente en la impugnación a Bucaram, y esto obedece a que inicialmente los indígenas no pensaban en el derrocamiento, sino en la exigencia de rectificación de rumbos. En los acontecimientos del 21 de enero de 2000, el protagonismo indígena fue compartido con las Fuerzas Armadas y, en realidad, fueron las fuerzas propulsoras del ajuste las beneficiarias del desenlace. Lo que sostendría la primacía cualitativa de la presencia indígena son los levantamientos masivos, oportunamente preparados y asentados en una sólida organización con redes a nivel nacional, y el papel crucial de

las bases indígenas en las decisiones tomadas sobre todo, en los levantamientos de 2000 y 2001.

En conjunto, la movilización, llevada a cabo desde disímiles estilos y dinámicas, ha tenido un efecto más de resistencia a los efectos extremos del modelo de ajuste, que de reversión o instauración de alternativas al mismo; y esas acciones se han llevado a cabo en entornos contradictorios: entre la presión de las bases y, en muchos casos –como el de la CONAIE– la adscripción cada vez mayor de algunos sectores dirigenciales al establishment político.

Ahora bien, más allá de las características generales de la movilización, ¿cuál es el saldo de la intensificación de la protesta, en lo que concierne a los objetivos enunciados por los sectores impugnadores de las políticas gubernamentales en la línea del ajuste? ¿Cómo se ha reordenado el campo político, de cara a la resolución del conflicto mayor: el estatuto ciudadano en lo relativo a la redistribución y el reconocimiento?

En este aspecto vemos un resultado contradictorio, pues, por una parte, se habría operado una democratización de la sociedad en su conjunto, en lo que se refiere al reconocimiento de derechos políticos de amplios sectores: indígenas y mujeres fundamentalmente, lo que, en cierta medida ha conllevado el remozamiento de las elites políticas (con la inclusión de representantes de dichos sectores en altos puestos de dirección del Estado). Pero de otro lado, la sobreacumulación de factores económico-sociales que restringen el acceso a la igualdad, es decir la permanencia de la no resolución del conflicto distributivo, continuará generando nuevas tensiones.

La movilización de estos últimos años ha servido de freno a la instauración del ajuste, ha dilatado sus ritmos, pero no ha logrado revertirla; aun más, actuaciones como las del 21 de enero de 2001 parecen haber abierto un camino a la coronación de las reformas económicas con una salida radical como la dolarización, durante el gobierno de Noboa, y el ingreso al Tratado de Libre Comercio impulsado por el gobierno de Gutiérrez. Y ello obedece –menos que a la inevitabilidad de “globalizarse”– a la inserción del país en un cuadro internacional en el que la presencia hegemónica de los Estados Unidos es indiscutible, y en el que, además, las fuerzas críticas del modelo neoliberal no han logrado rearticularse, ni elaborar discursos y estrategias políticas convincentes. Y serían poco convincentes no tanto en el plano lógico y propositivo, cuanto en el plano simbólico, pues las fuerzas contrarias al ajuste no se han planteado una estrategia de reversión del vacío simbólico y discursivo al que han sido sometidas por los grandes medios de comunicación y los gobiernos. Pero tiene que ver también con la propia situación interna de fragmentación. Toda la ebullición social que hemos experimentado carecería de una propuesta estratégica, tanto en el

plano del encauzamiento de la protesta, cuanto de fórmulas políticas y económicas plausibles y viables. Así, los movilizados en el Ecuador durante los últimos años constituirían “una multiplicidad que todavía no es multitud, un sujeto por constituirse, antes que la acción concertada de un sujeto constituido” (Unda Soriano, 2001: 140).

¿Hemos de esperar nuevas eclosiones de movilización antisistémica, cuando se reinicie la toma de grandes decisiones gubernamentales? Esta pregunta es crucial, y lo que veamos va a depender de los vectores de fuerzas en el campo político que se inauguró con las elecciones presidenciales de noviembre de 2002. Va a depender también de la visión de las elites para “cooptar” a las dirigencias de los sectores movilizados y neutralizar a sus bases.

Por el momento, vemos un Ecuador aprisionado en las reglas de juego dictadas por la inserción en la economía global. Y aprisionado férreamente a través del régimen de la dolarización, del cual no parece haber salida ni en el corto ni en el mediano plazo. Ello, desde luego, es un resultado adverso a los objetivos de la movilización de estos años, resultado que, no obstante, podría ser el devenir de las propias limitaciones de las estrategias planteadas.

En lo que concierne a los límites de las acciones de protesta, diríamos que si la crítica radical de otras fuerzas sociales está limitada por su fragmentación, la presión indígena parece estar limitada “genéticamente” por la forma en la que se expresa: a través de los “levantamientos”. Así, de acuerdo al Equipo de Coyuntura del CAAP, los levantamientos serían intentos por derrocar, mediante manifestaciones violentas, poderes establecidos. De tal manera:

El levantamiento indígena tiene por sí mismo un efecto organizador limitado a la misma acción, es productor de su propia conducción y dirigencia, portador de cambios inmediatos y tiene una especificidad social y étnica, excluyente de alianzas interclasistas (CAAP, 2000b: 58).

Podríamos, entonces, sugerir lo siguiente. Primero, si ciertamente muchas acciones del movimiento indígena y, en particular, el acuerdo de 21 puntos beneficia a un amplio espectro de la población, a todas luces el movimiento indígena ha conseguido hegemonizar el descontento y la protesta, lo que lo torna, por así decirlo “carismático”, inclusivo y capaz de arrastrar las más diversas demandas parciales, cuyos portadores usufructúan la oportunidad para expresarse. “Carismático”, sobre todo, en la medida de la existencia, en su movilización y discurso, de una faceta moral, compatible con el horizonte cotidiano de evaluación de la política. Segundo, los levantamientos respondieron a cuestionamientos específicos con ciertas dosis de “diferencialismo”, resultantes de la con-

fluencia de diversos sectores, a pesar del tenor clasista, universalista y antisistémico predominante en los últimos años; de ahí que sus logros también sean parciales y los efectos macropolíticos, de resistencia.

Las fuerzas contrarias al ajuste durante los últimos años han aprovechado las oportunidades surgidas para movilizarse. Sin embargo, ¿cuánto aliento dieron a la movilización las concepciones políticas que la animan, las metas que las organizaciones se plantearon? ¿Cómo incidió la limitación “genética” de la movilización de los indígenas, líderes de la protesta, en la consecución de las metas que decían perseguir? ¿Existe la posibilidad de que eventualmente las bases, sobre todo indígenas, abandonen a su dirigencia, o viceversa? ¿Existió la posibilidad de un desencuentro entre estas dos instancias, al momento de definiciones cruciales? En suma, ¿hablan unas y otras el mismo lenguaje político y comparten, acaso, las mismas intenciones? Los acontecimientos que advienen luego del triunfo de Lucio Gutiérrez, y la inclusión de varios de los dirigentes indígenas más prominentes en el gabinete ministerial, sugieren un abandono de objetivos antaño proclamados, ante lo cual organizaciones como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), entre otras, consideraron prudente distanciarse de la dirigencia de la CONAIE. A pesar de lo cual, el espejismo del poder ha llevado a ciertos sectores indígenas de la Amazonía y a los evangélicos a alinearse con el gobierno de Gutiérrez.

Todas estas dudas son el síntoma de objetivos frustrados, de límites de la acción con respecto a las grandes metas trazadas y a las expectativas generadas en algunos sectores de opinión. Queda aún por explicar por qué las rupturas ocurren precisamente en tales momentos, cuando están en la parte inferior del ciclo de la protesta, como ocurrió por ejemplo el 21 de enero de 2000. ¿Será, quizá, que estos son los momentos en que logra concretarse una estrategia política de los sectores afines al ajuste, y que las fuerzas opositoras fueron sorprendidas sin objetivos propios, pero con un ánimo insurreccional boyante?

La división de las fuerzas directoras de la protesta entre 1996 y 2001, su desmovilización y desplazamiento de su estilo de hacer política sería un indicativo del cierre del ciclo de protesta, así como del ciclo de equilibrio político entre las fuerzas opositoras y las impulsoras del ajuste. En lo que podríamos denominar un nuevo ciclo político-estratégico persistirá, sin duda, el imperativo de lograr la cohesión de las fuerzas opositoras al modelo neoliberal. Sin ello será difícil recrear, durante los próximos años, aun el precario equilibrio que ha caracterizado en los últimos años a la correlación de las fuerzas en pugna por el ajuste en el campo político. Es menester, asimismo, una mayor proyección internacional de estas fuerzas, proyección hoy apenas barruntada en la participación en los Foros Sociales.

Todos estos elementos vacilantes parecen condensarse en el tipo de vínculos que han tejido las fuerzas opositoras, y en particular el movimiento indígena y la Coordinadora de Movimientos Sociales, con el poder del Estado. Guerrero y Ospina (2003) consideran que, en el caso del movimiento indígena, esta relación tiene una doble vertiente. En primer lugar, estaría la lucha por la representatividad institucional, el control de gobiernos locales y el aumento de la presencia parlamentaria. En segundo lugar, se intentaría actuar deslegitimando el régimen político desde una movilización potencialmente subversiva. Por otra parte, estaría siempre latente la idea de construir el poder desde las comunidades. Para estos autores, esta curiosa combinación se inscribiría en una búsqueda de acceder al poder empujando desde fuera y desde dentro del poder del Estado (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

En mi perspectiva, tales prácticas y formas de hacer política conllevaron elementos novedosos, ausentes en el estilo político de otras fuerzas contestatarias. Tal estrategia de doble presión y la impronta insurreccional no la tuvo, en su tiempo, el FUT que siempre privilegió la negociación institucionalizada y, tras el agotamiento de esta, a la huelga como método de presión, sin disputar la ubicación “dentro” del Estado, aunque también sin desdeñar eventuales cooptaciones desde el Estado. La parsimonia de la estrategia indígena y de la Coordinadora de Movimientos Sociales que ha dado ciertamente réditos político-institucionales, no obstante, se ha visto afectada profundamente al momento de inscribirse en el poder del Estado, de cara a los objetivos de democracia social y política que decía perseguir. Soy propensa a pensar que las cúpulas de las fuerzas que han hegemonizado la protesta de fin de siglo han llegado a compromisos más profundos con el establishment de lo que otrora lo hiciera el movimiento sindical. Esto podría deberse a varios factores. Primeramente, la matriz ideológica de sectores de la dirigencia que sobreestima la dimensión étnica en detrimento de la de clase, inscribiendo su propuesta en un modelo transnacional traído de la matriz multicultural norteamericana. Esto conllevaría a una apetencia del poder como poder étnico *per se* y se acompañaría de lo que Augusto Barrera, en la entrevista concedida, denominara “etnopolitismo”, entendido como la negociación indiscriminada en nombre de los objetivos de la comunidad. Ahora desde luego, la actuación del indigenado en su conjunto es mucho más compleja y polívoca que esto, pues de lo contrario no podría haber tenido lugar la proclamación de “Nada sólo para los indios”, en enero de 2001. Cabe, entonces, un decantamiento ideológico-político en torno al tema de la relación con el poder del Estado, una crítica al instrumentalismo insurreccional, carente de un análisis estratégico-táctico detenido, instrumentalismo que habría estado presente, sobre todo, en enero de 2000.

Finalmente, esperaríamos que el discurso crítico de las fuerzas de la protesta sea elaborado cuidadosamente, tomando el pulso a las demandas socio-políticas más relevantes, evitando replicar el recorte hecho por los medios de comunicación, concediendo al tema de la lucha contra la corrupción el lugar que le compete en la jerarquía de las demandas políticas y, más que nada, empeñándose en que el tema moral no se convierta en coartada para la profundización del ajuste. En tal sentido, cabe una reflexión seria en torno a las estrategias pertinentes en lo relativo a la “lucha discursiva” y, sobre todo, meditar profundamente sobre la relación con el poder institucionalizado.